

EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEPORTIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

The exercise of sports disciplinary power
in the field of local administration

ALEJANDRO VALIÑO

Catedrático de la Universitat de València.
Presidente del Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana

Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento 67

Abril – Junio 2020

Págs. 47-92

Resumen: El artículo analiza la potestad disciplinaria deportiva de las entidades locales.

Palabras clave: Deporte – Potestad disciplinaria – Entidades locales.

Abstract: This article analyzes the sports disciplinary power of local entities.

Keywords: Sport – Disciplinary power – Local entities.

Fecha de recepción: 21-3-2020

Fecha de aceptación: 27-3-2020

SUMARIO: I. ARTICULACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS PODERES PÚBLICOS EN MATERIA DEPORTIVA. II. CONTENIDO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DE LOS PODERES PÚBLICOS EN MATERIA DEPORTIVA. III. NATURALEZA DE LAS COMPETICIONES SUJETAS A LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEPORTIVA. IV. ÓRGANOS A LOS QUE COMPETE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEPORTIVA. V. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN MATERIA DEPORTIVA. VI. ESPECIFICIDADES AUTONÓMICAS EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEPORTIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 1. *Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid*. 2. *Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte del Principado de Asturias*. 3. *Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura*. 4. *Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco*. 5. *Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte de Cantabria*. 6. *Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto único de la Ley del Deporte de la Comunidad Autónoma de Cataluña*. 7. *Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra*. 8. *Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte*

de las Illes Balears. 9. Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. 10. Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia. 11. Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. 12. Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. 13. Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha. 14. Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 15. Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la Actividad Física y el Deporte de Aragón. 16. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 17. Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León. VII. CONCLUSIONES.

I. ARTICULACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS PODERES PÚBLICOS EN MATERIA DEPORTIVA

El deporte constituye uno de los aspectos más relevante de la vida social, lo que explica que se encuentre altamente regulado¹, generando así un notable conjunto normativo en cuya producción intervienen órganos de muy diversa naturaleza² y, en consecuencia, intervinientes en escenarios competenciales diferenciados.

Como es conforme con el principio de jerarquía normativa, en la cúspide de este conjunto normativo se sitúa la Constitución Española con el propósito de implicar a todos los poderes públicos en el fomento de “la educación sanitaria, la educación física y el deporte” y en el favorecimiento de una “adecuada utilización del ocio³”. De este modo, sin constituir propiamente un derecho fundamental, el deporte constituye un principio rector de la política social y económica del Estado⁴, relacionándose sistemáticamente con el ámbito de protección de la salud, pues, ¡qué duda cabe!, que el deporte es considerado un mecanismo tanto de prevención de patologías e inadaptaciones como de recuperación de las personas con problemas físicos y emocionales, enlazando con una imagen integral del bienestar que explica la presencia y relevancia del deporte en infinidad de programas, con especial atención al contexto escolar⁵. Por tal razón, la actuación de los poderes públicos⁶ debe dirigirse al

1. El fin al que se dirige esta normativización del fenómeno deportivo es su tutela y fomento en cuanto manifestación cultural tenida por “factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad” (art. 1.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte).
2. Constatándose en este ámbito de la vida social una fortísima presencia del sector privado, la intervención de los poderes públicos en la regulación del deporte debe encontrar su justo medio, “rechazando, por un lado, la tentación fácil de asumir un protagonismo público excesivo y, por otro lado, la propensión a abdicar de toda responsabilidad en la ordenación y racionalización de cualquier sector de la vida colectiva” (Exposición de Motivos de la Ley 10/1990). Ello se concreta en el art. 1.4 de la Ley 10/1990 en la máxima programática de que “el ejercicio de las respectivas funciones del sector público estatal y del sector privado en el deporte se ajustará a los principios de colaboración responsable entre todos los interesados”.
3. Art. 43.3 de la Constitución Española.
4. Capítulo III del Título I de la Constitución Española.
5. En este campo, la prevalencia de la política deportiva autonómica respecto la de otras entidades es clara, como bien se extrae del tenor del art. 8.j) de la Ley 10/1990, que simplemente atribuye al Consejo Superior de Deportes competencia para “coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar y universitario, cuando tenga proyección nacional e internacional”.
6. Una visión general sobre la cuestión en Carretero Lestón, J.L. (2016). *La organización pública estatal del deporte en España*. El Derecho del Deporte en Iberoamérica. Desafíos y experiencias nacionales en el siglo XXI, 24-35.

fomento de la práctica del deporte⁷ por los beneficios multidisciplinares que trae consigo (entre otros, para la salud, para el adecuado aprovechamiento del tiempo libre o para la integración e inclusión de colectivos potencialmente más desfavorecidos)⁸, comprendiendo todo lo concerniente a la promoción de instalaciones deportivas, incluyendo el mantenimiento en condiciones de seguridad y racional aprovechamiento de las ya existentes en el ámbito territorial de sus respectivas funciones y competencias⁹.

La referencia constitucional a los poderes públicos' como equivalente a la Administración' en cualquiera de sus múltiples manifestaciones (Estado central, municipios, provincias y Comunidades Autónomas)¹⁰ comporta que todas ellas asuman y ejerzan competencias relacionadas con el deporte dentro de su específico ámbito territorial de actuación.

De entre tales entes, sobresale la expresa mención que el propio texto constitucional hace a las Comunidades Autónomas, a las que faculta para asumir competencias en materia de "*promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio*"¹¹. Y algo más de un decenio después, la Ley 10/1990 se hacía eco de esa efectiva asunción competencial acometida por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos, no sin recordar que "*la atribución de competencias sobre deporte o promoción del deporte (...) ha de ponerse en conexión estricta con los ámbitos territoriales de las respectivas Comunidades Autónomas*"¹².

También la Administración local, con los entes que la integran (municipios y provincias, principalmente), está también implicada en el ejercicio de competencias en materia deportiva, en concreto en lo relativo a la "*promoción del deporte e instalaciones deportivas*"¹³, sin perjuicio de poder actuar como delegatarios en la "*gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado*"¹⁴.

7. A este respecto, señala la Exposición de Motivos de la Ley 10/1990 que "*una de las formas más nobles de fomentar una actividad es preocuparse por ella y sus efectos, ordenar su desarrollo en términos razonables, participar en la organización de la misma cuando sea necesario y contribuir a su financiación*".

8. Algunos de estos elementos se esconden detrás de la definición de deporte' que se contiene en el art. 2.1 de la Carta Europea del Deporte de 1992: "*todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles*".

9. Valiño, A. (2019). Aspectos jurídicos de interés para la gestión de clubes, academias y federaciones de tenis. E-Coach. Revista Electrónica del Técnico de Tenis n.º 34, 40-48.

10. Art. 137 de la Constitución Española.

11. Art. 148.1.19 de la Constitución Española.

12. Exposición de Motivos de la Ley 10/1990.

13. Art. 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El art. 26.1.c) de esta norma precisa que los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán contar, como servicio público, con "*instalaciones deportivas de uso público*".

14. Art. 27.3.h) de la Ley 7/1985, que justifica esta delegación en el propósito de "*evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio*".

II. CONTENIDO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DE LOS PODERES PÚBLICOS EN MATERIA DEPORTIVA

La Ley 10/1990 y las leyes del Deporte de las distintas Comunidades Autónomas contemplan de forma más o menos exhaustiva un régimen disciplinario, que principalmente se compone de un conjunto de ilícitos o infracciones graduadas en muy graves, graves o leves en función del mayor o menor reproche que merecen, que han de hallarse debidamente tipificadas; de unas sanciones de muy distinta naturaleza, también tipificadas, que pueden imponerse a quienes incurran en la comisión de alguna de las infracciones normativamente previstas; de unos procedimientos denominados sancionadores o disciplinarios, ordenados a la investigación de los hechos que pudieran ser eventualmente constitutivos de infracción y, en consecuencia, de sanción; y de unos órganos que, por hallarse dotados de potestad sancionadora en el ámbito disciplinario, están facultados para acometer esa investigación y, en su caso, sancionar a los responsables.

La Ley 10/1990 circunscribe el ámbito de la disciplina deportiva a “las infracciones de reglas del juego o competición y normas generales deportivas tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de Clubes deportivos, Ligas profesionales y Federaciones deportivas españolas¹⁵”. Seguidamente, la Ley 10/1990 precisa que “son infracciones a las reglas del juego o competición las acciones u omisiones que, durante el curso del juego o competición, vulneren, impidan o perturban su normal desarrollo”, mientras que “son infracciones a las normas generales deportivas las demás acciones u omisiones que sean contrarias a lo dispuesto por dichas normas¹⁶”.

El contexto en el que se desenvuelve la comisión de las infracciones a las reglas del juego o de la competición es indefectiblemente la propia competición, mientras que las infracciones a las normas generales deportivas pueden acontecer, no sólo en relación con las competiciones, sino en otros escenarios como, por ejemplo, la gestión del deporte. Este dualismo trae consigo que las infracciones del primer tipo respondan o se adapten mejor a la especificidad de cada deporte, que cuenta con sus propias reglas, y suele materializarse su tipificación a través de normas de menor rango, como estatutos y reglamentos disciplinarios. En cambio, las del segundo tipo suelen ser mucho más transversales, son aplicables sobre cualquier modalidad deportiva y trascienden de lo estrictamente competitivo. Incluso en algunas leyes autonómicas del deporte, estas infracciones se desdoblan a su vez en distintos grupos, atribuyendo competencias para conocer de ellas a órganos distintos y utilizando incluso denominaciones distintas para designar las diferentes modalidades de ejercicio de esta cuasijurisdicción o potestad sancionadora de carácter deportivo¹⁷.

a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos”.

15. Art. 73.1 de la Ley 10/1990.

16. Art. 73.2 de la Ley 10/1990.

17. Por ejemplo, la Ley 2/2011 de la Generalitat Valenciana contempla, dentro del Título VII dedicado a la Inspección Deportiva, un régimen sancionador a cargo de distintos órganos

Centrándonos estrictamente en el ámbito funcional de la disciplina deportiva, ha de ponerse en relación con el territorial al que se extienden las competencias en materia deportiva de los distintos poderes públicos implicados en la cuestión. Por tal razón, los órganos que ostentan potestad disciplinaria deportiva, consistente en “*la facultad de investigar y, en su caso, sancionar o corregir a las personas o Entidades sometidas a la disciplina deportiva*”¹⁸, la tienen circunscrita a su preciso ámbito territorial de actuación. Los que enuncia la Ley 10/1990¹⁹ están legitimados para intervenir “*cuando se trate de actividades o competiciones de ámbito estatal y, en su caso, internacional, o afecte a personas que participen en ellas*”²⁰, de lo que automáticamente se desprende que, tratándose de actividades o competiciones de un ámbito territorial más restringido (autonómico o local, por ejemplo), la potestad disciplinaria será ejercitada por órganos distintos facultados para ello por la normativa general (principalmente las leyes autonómicas del deporte y los reglamentos que las desarrollan) y específica reguladora de la actividad o competición de que se trate (en esencia, los estatutos y reglamentos federativos o de otra índole).

III. NATURALEZA DE LAS COMPETICIONES SUJETAS A LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEPORTIVA

En la medida en que la potestad disciplinaria deportiva se relaciona principalmente con el ámbito de la competición, es imprescindible examinar las clases más relevantes que nos ofrecen las leyes del deporte. El Preámbulo de la Ley 10/1990 señala que “*la faceta competitiva de ámbito estatal e internacional que es inherente al deporte justifica la actuación del Estado*”, con lo que, por exclusión, puede hablarse también de competiciones de ámbito autonómico y de ámbito local, ambas comprendidas dentro de las competiciones “*de ámbito territorial inferior*” a las que se refiere el texto articulado estatal²¹. En efecto, las competiciones se clasifican en torno a dos criterios, que se repiten de forma constante en todas las leyes del deporte vigentes en España, tanto en la ley estatal como en las de las Comunidades Autónomas.

Así, por lo que concierne al ámbito estatal, el art. 46.1. de la Ley 10/1990 establece lo siguiente:

“A efectos de esta Ley, las competiciones deportivas se clasifican de la forma siguiente:

a) Por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de carácter profesional o no profesional.

del gobierno autonómico, que es distinto del que se recoge en el Título VIII bajo la rúbrica ‘Jurisdicción Deportiva’, articulada en los ámbitos disciplinario, competitivo y electoral (art. 116) y a cargo, principalmente, de las federaciones deportivas y el Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana (arts. 118.2, 119.2, 120.2, 166 y 167).

18. Art. 74.1 de la Ley 10/1990.

19. El art. 74.2 de la Ley 10/1990.

20. Art. 73.1 de la Ley 10/1990.

21. Art. 46.1.b) de la Ley 10/1990.

b) Por su ámbito, en competiciones internacionales, estatales y de ámbito territorial inferior”.

Dejando de lado la distinción entre competiciones profesionales y no profesionales, los otros dos criterios de clasificación se combinan sin dificultad, de modo que el marco normativo estatal es el que se relaciona con la calificación como oficiales o no oficiales de las competiciones de ámbito estatal y la organización o tutela en España de las de carácter internacional, mientras que serán las leyes del deporte autonómicas las que fijen los presupuestos de calificación y distinción entre competiciones oficiales y no oficiales de ámbito territorial inferior al estatal, como son las de ámbito autonómico, provincial, comarcal, municipal o insular, sin perjuicio de lo que pueda disponer la reglamentación concreta que regule la competición.

El reconocimiento de las competiciones como oficiales, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que hayan de desenvolverse, depende de que hayan sido calificadas como tales, bien por una Federación deportiva, bien por otros órganos de la Administración Pública con competencias en materia deportiva, con independencia de quién las organice (personas físicas o jurídicas, personas públicas o privadas)²². En definitiva, este reconocimiento o calificación, como se infiere de la Ley 10/1990²³, ha de ser otorgado por órganos que cumplen funciones públicas de carácter administrativo, como las Federaciones deportivas para las amateurs o el Consejo Superior de Deportes para las profesionales²⁴. Será la Federación española, cuando la competición oficial sea de ámbito estatal o internacional²⁵, o una Federación autonómica, cuando se circunscriba a ese preciso ámbito espacial, mientras que el papel del Consejo Superior de Deportes corresponderá en las Comunidades Autónomas a los organismos que en ella ejerzan las competencias en materia de deporte cuando se trate de competiciones de ámbito territorial inferior al estatal.

22. Art. 46.3 de la Ley 10/1990.

23. Así se desprende de algunas referencias en el Preámbulo de la Ley 10/1990, como, por ejemplo, la mención de que *“la Ley no autoriza una quiebra del núcleo federativo, pues es éste el genuino catalizador de las labores de promoción del deporte, pero reconoce personalidad jurídica y autonomía organizativa y funcional a las Ligas profesionales hasta el grado y con la intensidad que ese modo de práctica deportiva aconseja”*; o la indicación de que *“se establece la obligatoriedad de constitución, en el seno de las estructuras federativas, de Ligas integradas exclusiva e imperativamente por todos los clubes que participen en competiciones oficiales de carácter profesional”*, previendo así el sometimiento, no obstante su autonomía organizativa y funcional, de las Ligas profesionales a la Federación de que se trate.

24. Art. 46.2 de la Ley 10/1990.

25. Los arts. 8 y 33 de la Ley 10/1990 con toda seguridad utilizan el término *‘calificar’* las competiciones oficiales de ámbito estatal en el sentido de dotar o revestir de oficialidad a la competición de que se trate, con independencia de quien sea su directo o inmediato organizador (art. 46.3 de la Ley 10/1990, que menciona entre los organizadores a *“personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, clubes deportivos, ligas profesionales y Federaciones deportivas”*). En cambio, cuando se trata de competiciones de ámbito internacional, cuyo carácter oficial viene atribuido por entidades supranacionales, se atribuye al Consejo Superior de Deportes la función de *‘autorizar’* o *‘denegar’* su celebración en territorio español. Una vez autorizada, corresponderá a la Federación Española de la modalidad deportiva de que se trate su organización o tutela (arts. 33.1.e) y 39 de la Ley 10/1990).

Por el contrario, las no oficiales se definen negativamente como aquellas que carecen de tal calificación o reconocimiento, sin perjuicio de que su celebración pueda quedar sujeta a ciertos requerimientos, tales como autorizaciones federativas o de otros organismos o, cuanto menos, comunicaciones de su próxima celebración a las autoridades competentes con carácter previo a su inicio.

El otro criterio de diferenciación entre competiciones es el ámbito territorial al que se extienden, lo que por añadidura comporta la sujeción de tales competiciones a un distinto marco normativo, con prevalencia de las disposiciones de rango legal (la Ley 10/1990 para las competiciones de ámbito estatal e internacional y las leyes autonómicas del deporte para las competiciones de ámbito autonómico). Como ya hemos apuntado, la ausencia de leyes del deporte de ámbito local, que desencadenaría una situación de elefantiasis normativa en este campo, determina que las competiciones de ámbito local queden sujetas a la normativa de la Comunidad Autónoma a la que las entidades organizadoras se adscriben. Esta sujeción de la actividad deportiva de ámbito local al marco normativo autonómico no sólo queda determinada por exclusión de la aplicación de la Ley estatal, sino por las expresas referencias que las distintas leyes autonómicas han contemplado en su articulado a los entes de la administración local en el marco de distribución de competencias entre los muchos órganos que conforman la organización institucional del deporte en ese preciso ámbito territorial.

Del juego combinado de los distintos criterios de clasificación de las competiciones resulta que la potestad disciplinaria deportiva que aquí interesa examinar es aquella que recae sobre las oficiales de carácter local por ser éstas “*de ámbito territorial inferior*” al estatal, lo que supone que la normativa deportiva de referencia de mayor rango jerárquico haya de ser la ley del deporte de la Comunidad Autónoma, que podrá verse complementada por otras disposiciones más específicas vigentes en el ámbito provincial o municipal en el que discurra propiamente la competición.

IV. ÓRGANOS A LOS QUE COMPETE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEPORTIVA

Es una constante en todas las leyes del deporte la atribución de potestad sancionadora disciplinaria a una serie de personas y órganos, que, por tal razón, se repiten recurrentemente en todas las leyes del deporte, cualquiera que sea su ámbito territorial de aplicación. Por partir de la Ley de ámbito estatal, el art. 74.2 de la Ley 10/1990 establece que “*el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponderá*:

a) A los jueces o árbitros, durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad deportiva²⁶.

26. No son pocas, en cambio, las leyes autonómicas del deporte que excluyen que la actividad de los jueces o árbitros sea una manifestación del ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva. Así, por ejemplo, el art. 152.2 de la Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio

b) A los Clubes deportivos, sobre sus socios o asociados, deportistas o técnicos y directivos o administradores.

c) A las Federaciones deportivas españolas, sobre: Todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica; los Clubes deportivos y sus deportistas, técnicos y directivos; los jueces y árbitros, y, en general, todas aquellas personas y Entidades que, estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito estatal.

d) A las Ligas profesionales, sobre los Clubes deportivos que participan en competiciones oficiales de carácter profesional y sobre sus directivos o administradores.

e) Al Comité Español de Disciplina Deportiva, sobre las mismas personas y Entidades que las Federaciones deportivas españolas, sobre estas mismas y sus directivos, y sobre las Ligas profesionales”.

A efectos meramente comparativos, la Ley del Deporte de la Generalitat Valenciana atribuye la denominada potestad jurisdiccional deportiva de ámbito disciplinario²⁷:

a) A los jueces o árbitros durante el desarrollo de los encuentros, pruebas o competiciones con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones generales de cada modalidad o especialidad deportiva o en las específicas aprobadas para las competiciones de que se trate.

b) A los clubes deportivos, a través de la junta directiva u órganos disciplinarios correspondientes, sobre sus socios o asociados, deportistas, técnicos, entrenadores, directivos o administradores.

c) A las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana, a través de sus órganos disciplinarios, sobre todas las personas que forman parte de su estructura orgánica, sobre los clubes deportivos y sus deportistas, técnicos, entrenadores, jueces-árbitros y, en general, sobre todas aquellas personas y entidades que, estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

d) A las universidades de la Comunitat Valenciana, a través de sus órganos disciplinarios deportivos, sobre todas aquellas personas y entidades deportivas que desarrollan su actividad en las competiciones interuniversitarias de la Comunitat Valenciana.

e) Al Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana sobre las mismas personas y entidades que las federaciones deportivas autonómicas, sobre éstas mismas, sobre sus directivos e integrantes de los demás órganos de la federación y sobre las mismas personas y entidades deportivas que las universidades de la Comunitat Valenciana y sobre éstas mismas.

físico y del deporte de La Rioja; el art. 124.2 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía; y el art. 103.2 de la Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León.

27. Art. 118.2 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte.

Todas las referencias a la locución potestad jurisdiccional deportiva' se sitúan en el Título VIII de la Ley 2/2011 bajo la rúbrica Jurisdicción Deportiva' e integra, como ya hemos apuntado, tres ámbitos distintos: el disciplinario, el competitivo y el electoral²⁸.

La denominación por la que ha optado el legislador autonómico valenciano no ha sido precisamente afortunada. El empleo de términos como jurisdicción' y jurisdiccional' para caracterizar el ámbito de cognición de órganos que se integran dentro de la Administración fue durante la tramitación de la norma objeto de un cierto reproche por parte del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana²⁹, que, cuanto menos, invitaba a la moderación en el uso indiscriminado de los mismos.

Dejando de lado estas consideraciones formales relacionadas con el ejercicio de la potestad sancionadora deportiva, interesa significar que, a pesar de las referencias normativas a las competencias en materia deportiva que corresponden a las entidades que integran la Administración local, no existe una norma de rango legal que, de forma directa, aborde en profundidad la cuestión. Las leyes del deporte con las que contamos (una estatal y muchas autonómicas) constituyen el marco normativo que posibilita, determina y condiciona la ejecución de las competencias que en materia de deporte confiere la Constitución Española a los poderes públicos en general y a las Comunidades Autónomas en particular. Tanto la ley estatal como la de las Comunidades Autónomas que han hecho uso de la competencia prevista en la Constitución, regulan el fenómeno exclusivamente en la dimensión territorial que les atañe, sin perjuicio de ocasionales referencias a órganos o escenarios de aplicación distintos, entre los cuales se halla el local en general o el municipal en particular.

En consecuencia, si mínimas son las referencias que las leyes del deporte, cualquiera que sea su ámbito territorial de aplicación y vigencia, hacen al deporte municipal, prácticamente inexistentes son las que se relacionan con la atribución de una potestad sancionadora de ámbito

28. Art. 116 de la Ley 2/2011.

29. En su Dictamen 2010/0995 al Anteproyecto de la Ley 2/2011 expresaba el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana que *"se ha de advertir que aunque la expresión jurisdicción deportiva' se encuentra recogida por diverso tipo de normas, no resulta conveniente hacer un uso tan extenso de ella, y muy especialmente del término jurisdiccional' o potestad jurisdiccional', ya que en el lenguaje jurídico todas estas invocaciones resultan aplicables exclusivamente a la función ejercitada por jueces y tribunales. Por lo tanto, este Consell estima que, si bien es posible conservar alguna referencia a la jurisdicción deportiva' como un sector propio de tal ámbito, por encontrar apoyo el uso de tal expresión en la normativa general, debería suprimirse las otras referencias a la potestad jurisdiccional' y en general a lo jurisdiccional', por resultar su utilización inadecuada en los términos y por las razones ya expuestos"*. La referencia que hace el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana a que el uso de la expresión jurisdicción deportiva' encuentra apoyo *"en la normativa general"* no deja de ser enigmática, pues se ignora qué quiso decirse con normativa general'. Si se quiso aludir con esta locución a la Ley 10/1990, contraponiéndola a la normativa especial, también de rango legal, promulgada en las distintas Comunidades Autónomas, la comparación o puesta en relación no puede ser más inadecuada, pues los términos jurisdicción' o jurisdiccional' no comparecen ni una sola vez en la norma estatal.

disciplinario a las entidades que conforman la Administración local, pese a lo cual no puede desconocerse su intervención en la organización, control y seguimiento de actividades de competición en el marco territorial de su actuación. De ahí que, en estrecha conexión con esa intervención, se haya de examinar a quién corresponde y con arreglo a qué parámetros y presupuestos el ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria en el ámbito de la Administración local.

V. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN MATERIA DEPORTIVA

Como ya se ha significado, las competencias de la Administración local en materia deportiva encuentran su fundamento normativo de forma explícita en la Ley 7/1985 en los siguientes términos:

“el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre³⁰”.

El precepto, a los fines de ahondar sobre la cuestión planteada en la intitulación de este epígrafe, exige una minuciosa exégesis.

Por lo que concierne a la naturaleza de la competencia, ésta se concibe como propia, en contraposición a la previsión facultativa en esta misma norma del ejercicio de competencias correspondientes al Estado y las Comunidades Autónomas³¹.

En cuanto al sentido y alcance de la expresión promoción del deporte, no resulta sencillo ponerle límites, de modo que esta previsión normativa de rango legal confiere en la práctica a las entidades que integran la Administración local competencias en materia deportiva de amplio calado. En ella se acomodan sin dificultad todas las actividades de ámbito local relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de cualquier disciplina deportiva, pues indudablemente son la puerta de entrada a una práctica libre y autónoma del deporte. Pero también pueden incluirse actividades básicas de competición, especialmente aquellas que persiguen fines más lúdicos y relacionales que los específicamente agonísticos³².

30. Art. 25.2 de la Ley 7/1985.

31. Art. 27.1 de la Ley 7/1985.

32. Así, por su proximidad, interesa referir los fines de la Fundación Deportiva Municipal, entidad de derecho público creada por el Ayuntamiento de Valencia al objeto de acometer las competencias legalmente asignadas a este municipio en materia deportiva o de otra índole (art. 4.1 de los Estatutos del organismo autónomo Fundación Deportiva Municipal), que se detallan en el art. 5 y de los que ahora interesa destacar los siguientes: a) “el fomento de la actividad físico-deportiva, mediante la elaboración y ejecución de planes de promoción del deporte para todos, dirigidos a los diferentes sectores de la población, con especial atención al deporte escolar y las personas con minusvalías y las personas mayores”; g) “la organización de campeonatos de ámbito local y de eventos deportivos de carácter extraordinario”; y h) “la organización de acontecimientos deportivos de carácter extraordinario, pudiendo solicitar la colaboración de las federaciones deportivas correspondientes”.

VI. ESPECIFICIDADES AUTONÓMICAS EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEPORTIVA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Y es aquí cuando comparece lo que constituye propiamente el objeto del presente estudio (el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en el ámbito de la administración local), que indefectiblemente se vincula con el mundo de la competición, cualquiera que sea el nivel o los objetivos a los que pueda dirigirse.

Ello impone un examen de todas las leyes autonómicas del deporte vigentes en España, siguiendo el orden cronológico de su promulgación, poniendo el acento en las competencias en materia deportiva que atañen a los entes de la administración local en cada Comunidad Autónoma; en la tipología de competiciones que en cada una de ellas se prevé normativamente, con especial referencia a aquellas en las que participa más directamente la administración local; y en los órganos a los que compete el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en las competiciones de ámbito local.

1. LEY 15/1994, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El Título III de la Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid trata del reparto competencial en materia de deporte entre la Comunidad de Madrid y las entidades locales, que quedarán bajo la coordinación de la Administración Deportiva autonómica³³. La ley se refiere específicamente a las competencias de los ayuntamientos, entre ellas la de *“promover de forma general la actividad física y el deporte en su ámbito territorial, fomentando las actividades físicas de carácter formativo y recreativo, especialmente entre los escolares”*³⁴, entre las cuales, ¡qué duda cabe!, pueden tener cabida las competiciones.

A este respecto, dentro de los distintos criterios de clasificación de las competiciones, la Ley distingue entre internacionales, nacionales, interautonómicas, autonómicas y de ámbito territorial inferior³⁵, a las que también se extiende el ámbito de la disciplina deportiva³⁶. Entre ellas, pueden mencionarse los Juegos Deportivos Municipales³⁷, en los que el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponde en primera instancia a los denominados Comités de Disciplina Deportiva y de Competición de Distrito, y al Comité de Competición para la fase final de Madrid, mientras que

33. Art. 21.1 de la Ley 15/1994.

34. Art. 23.1.a) de la Ley 15/1994.

35. Art. 5.c) de la Ley 15/1994.

36. Art. 45.1 de la Ley 15/1994.

37. Que en la temporada 2019/2020 celebran su 40.º aniversario bajo la tutela del Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Se rigen por la Normativa General publicada el 15 de julio de 2019.

las funciones de Comité de Apelación serán ejercidas por las federaciones territoriales³⁸.

La ley contempla también la distinción entre competiciones oficiales y no oficiales. El reconocimiento de una determinada competición como oficial y la delimitación de su ámbito territorial corresponde a las federaciones deportivas autonómicas³⁹, con la salvedad de las de carácter profesional, calificadas así por la Administración Deportiva de la Comunidad de Madrid⁴⁰, y las organizadas por las Universidades dentro de su ámbito de actuación⁴¹. Pero también deben considerarse como tales los Juegos Deportivos Municipales, en los que se plasma la colaboración entre la administración local (Ayuntamiento de Madrid) y la autonómica (la Dirección General de Deporte el Gobierno de la Comunidad de Madrid).

Al margen de la calificación de las competiciones como oficiales, la Ley atribuye a las federaciones su organización y tutela dentro de su ámbito territorial⁴² así como el ejercicio de la potestad disciplinaria⁴³. No se contiene en la Ley, en cambio, referencia a órganos disciplinarios específicos que hubieran de actuar cuando se trate de competiciones de ámbito local organizadas por las federaciones, por lo que bien puede concluirse que las que en este ámbito territorial tengan carácter oficial habrán de quedar sujetas a la acción de los órganos disciplinarios federativos⁴⁴ y de la Comisión Jurídica del Deporte⁴⁵, concebida como órgano superior en el ámbito disciplinario dentro del territorio de la Comunidad de Madrid⁴⁶ y con competencia para *“el conocimiento y resolución, en vía de recurso, de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía administrativa deportiva, en el ámbito de la Comunidad de Madrid”*⁴⁷.

2. LEY 2/1994, DE 29 DE DICIEMBRE, DEL DEPORTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Ley del Deporte de Asturias refleja el reparto competencial que en materia deportiva corresponde a las administraciones autonómica y local, imponiendo entre ellas la debida coordinación en aras de una mejor promoción de la actividad deportiva⁴⁸. Incluso contempla dentro del Título II (Competencias y organización) un Capítulo II dedicado a la Administración deportiva local⁴⁹, delimitando las competencias en materia deportiva que

38. Arts. 6.1 y 6.2 de la Normativa General de los Juegos Deportivos Municipales.

39. Art. 36.a) de la Ley 15/1994.

40. Art. 6.1 y 2 de la Ley 15/1994.

41. Art. 16.1 de la Ley 15/1994.

42. Art. 36.d) de la Ley 15/1994.

43. Art. 36.e) de la Ley 15/1994.

44. Art. 47.2.c) de la Ley 15/1994.

45. Art. 47.2.e) de la Ley 15/1994.

46. Art. 59 de la Ley 15/1994.

47. Art. 60.a) de la Ley 15/1994.

48. Art. 6 de la Ley 2/1994.

corresponde a algunas de las entidades que la integran⁴⁹, como son los concejos⁵⁰ y mancomunidades⁵¹.

De entre las que se relacionan con las competiciones deportivas pueden mencionarse competencias propias de los concejos, como “el fomento de la actividad deportiva, en su vertiente del deporte para todos, mediante la elaboración y ejecución de los correspondientes planes de promoción, dirigidos a los diferentes sectores de su población⁵²”, “la organización y patrocinio, en el ámbito local, de actividades deportivas, en colaboración con las asociaciones y entidades deportivas⁵³” y “la ejecución de los programas locales de desarrollo deportivo en la edad escolar⁵⁴”.

La clasificación de las competiciones deportivas asturianas según su ámbito territorial en locales, comarcales y autonómicas⁵⁵ permite identificar las primeras con las que se celebran dentro del territorio de un concejo o, en su caso, mancomunidad.

El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva recae exclusivamente sobre competiciones oficiales, que son aquellas así calificadas por la Consejería del Principado de Asturias que sea competente en materia deportiva⁵⁶, exigiéndose para participar en ellas afiliación federativa⁵⁷. También la Ley asturiana del Deporte atribuye la facultad de calificar y organizar, en su caso, las competiciones oficiales de ámbito autonómico a las federaciones deportivas asturianas bajo la coordinación y tutela del órgano competente de la administración deportiva del Principado de Asturias⁵⁸.

Como regla general, los órganos a los que compete el ejercicio de esta potestad serán los existentes al efecto en las federaciones deportivas⁵⁹ y el

49. La Ley del Deporte tan sólo se refiere a la comarca como entidad local supramunicipal integrada por concejos limítrofes (art. 1 y 2 de la Ley 3/1986, de 15 de mayo, por la que se regula el procedimiento de creación de Comarcas en el Principado de Asturias), al clasificar las competiciones deportivas asturianas en función de su ámbito territorial (art. 59 de la Ley 2/1994).

50. Art. 9 de la Ley 2/1994. Es la denominación característica de los municipios asturianos, que constituyen, junto con las comarcas, las formas de organización territorial del Principado de Asturias, como señala el art. 6.1 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias.

51. Art. 13 de la Ley 2/1994.

52. Art. 9.a) de la Ley 2/1994.

53. Art. 9.g) de la Ley 2/1994.

54. Art. 9.h) de la Ley 2/1994.

55. Art. 59 de la Ley 2/1994.

56. Art. 8.d) de la Ley 2/1994.

57. Arts. 26.3, 33.5 y 37.2 de la Ley 2/1994. Ello no obstante, la normativa reguladora de la XXXIV Edición de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2019/2020 habla en el art. 7.2 de una licencia deportiva de los Juegos del Principado en los deportes que su normativa técnica lo señale, como una alternativa a la licencia federativa ordinaria, que también habilita para participar en dicha competición.

58. Arts. 45.a) y 61.1 de la Ley 2/1994, sin perjuicio de la encomienda o autorización a clubes deportivos, instituciones públicas y otras entidades privadas de la organización y gestión de competiciones deportivas oficiales (art. 61.2).

59. Arts. 45.h) y 68.2.c) de la Ley 2/1994.

Comité Asturiano de Disciplina Deportiva⁶⁰, al que corresponde “conocer y resolver en vía de recursos las pretensiones que se deduzcan contra los actos de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria que agoten la vía deportiva⁶¹”. Sin embargo, tratándose de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, el ejercicio de tal potestad se atribuye a un Comité Técnico Autónomo, facultado incluso para designar un Juez Único de Competición, que resuelva por vía de urgencia cuando estime que ello sea conveniente para el desarrollo de la competición⁶², siempre y cuando se trate “de las infracciones a la reglamentación general de los Juegos Deportivos⁶³”, interviniendo en los demás casos los órganos disciplinarios federativos autonómicos⁶⁴.

En conclusión, el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en competiciones de ámbito local o comarcal corresponderá principalmente a los órganos disciplinarios federativos⁶⁵ en la medida en que se trate de competiciones revestidas de oficialidad a través de la pertinente calificación, aunque los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, revestidos asimismo de carácter oficial⁶⁶, ofrecen en el aspecto disciplinario ciertas especificidades anteriormente significadas.

3. LEY 2/1995, DE 6 DE ABRIL, DEL DEPORTE DE EXTREMADURA

La organización del deporte en Extremadura viene conformada por entes tanto de la administración autonómica como local. A la consejería competente en materia de deporte corresponde “calificar y, en su caso, organizar las competiciones deportivas que tengan lugar en la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias que esta Ley atribuye a las federaciones deportivas⁶⁷”, mientras que sobre los municipios recae entre otras competencias “promover de forma general la actividad física y el deporte en el ámbito municipal, especialmente en

60. Art. 68.2.d) de la Ley 2/1994.

61. Arts. 80 y 82.3 de la Ley 2/1994.

62. Art. 2.2.b) de la Normativa reguladora de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2019/2020.

63. Art. 12.1 de la Normativa reguladora de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2019/2020.

64. Con la salvedad de la disciplina de fútbol sala, en la que actuará el Comité Técnico Autónomo, aplicando la normativa competicional y disciplinaria federativa (art. 12.2 de la Normativa reguladora de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2019/2020).

65. La Comunidad de Madrid cuenta con un Reglamento de Disciplina Deportiva aprobado por Decreto 195/2003, de 31 de julio, que prevé en su art. 38 con carácter facultativo una doble instancia federativa.

66. El art. 1 de la Normativa reguladora de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 2019/2020 establece que “es competencia de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, a través de su Dirección General con competencias en materia de deporte, la convocatoria, organización, coordinación y desarrollo de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, en colaboración con los Municipios y Federaciones Deportivas del Principado”, de modo que esta competición es una buena muestra de la cooperación entre órganos de la administración institucional asturiana y entidades privadas que cumplen funciones públicas de carácter administrativo.

67. Art. 7.h) de la Ley 2/1995.

el área escolar (...)»⁶⁸, sin perjuicio de la asistencia técnica y económica que puedan brindarles las Diputaciones provinciales⁶⁹.

La Ley contempla la diferenciación, según su naturaleza, entre competiciones oficiales y no oficiales. También, según su ámbito, se articulan en regionales, provinciales y locales⁷⁰. Ambos criterios parecen combinarse, puesto que las competiciones oficiales de ámbito regional han de ser calificadas por la Consejería del Gobierno extremeño que sea competente en materia deportiva⁷¹, de lo que se infiere que, siendo de ámbito territorial inferior (provincial o local), bastará para que la competición quede revestida de oficialidad la calificación de la federación deportiva de que se trate⁷².

La ley extremeña no confiere a las entidades locales extremeñas una competencia directa y específica en materia de competiciones, lo que no excluye que en el marco de la política de promoción y fomento del deporte, especialmente escolar, puedan erigirse en motor organizativo de las mismas, si bien privadas de la calificación de oficiales, para las cuales se exige estar en posesión de una licencia federativa⁷³.

El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva, atribuida en esencia a las federaciones deportivas y al Comité Extremeño de Disciplina Deportiva⁷⁴, principalmente en vía de recurso⁷⁵, se circunscribe a lo que acaezca en las competiciones oficiales de carácter regional⁷⁶, lo que hace emerger ciertas dudas sobre su proyección a las competiciones de ámbito territorial inferior. Parece razonable pensar que, siendo competiciones revestidas de oficialidad por la calificación otorgada federativamente, lo que en ellas pueda suscitarse en el plano disciplinario pueda someterse al conocimiento de los órganos disciplinarios

68. Art. 7.1.a) de la Ley 2/1995.

69. Art. 8.2 de la Ley 2/1995.

70. Art. 58.1 de la Ley 2/1995.

71. Art. 58.3 de la Ley 2/1995.

72. El art. 30.b) de la Ley 2/1995 dispone que las federaciones deportivas extremeñas, bajo la coordinación y tutela de la Consejería competente en materia de deporte, ejercerán las funciones de *“calificar, organizar, desarrollar y tutelar las actividades y competiciones oficiales en el ámbito deportivo extremeño”*.

73. Art. 16.1.c) de la Ley 2/1995, tratándose de entidades deportivas. En cambio, el art. 58.3 y el art. 60.1 parecen circunscribir la exigencia de licencia para deportistas a las competiciones oficiales de ámbito regional o autonómico, lo que *sensu contrario* parecería dispensar de tal requisito en competiciones de ámbito estrictamente provincial o local.

74. Art. 76.2.c) y d) de la Ley 2/1995, si bien circunscrita su competencia a las infracciones a las reglas del juego y de la competición, pues las de las normas generales deportivas son objeto de conocimiento por la Dirección General competente en materia de Deportes de la Junta de Extremadura (art. 76.2.e).

75. El art. 80.1 de la Ley 2/1995 le impone *“conocer de los recursos que se interpongan contra los acuerdos de los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas extremeñas, una vez agotada la correspondiente vía federativa”* (a), pero también *“conocer y resolver cualquier otro asunto que atente contra el buen orden deportivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma”* (b), lo que inevitablemente podría desencadenar un conflicto competencial con la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura (art. 76.2.e) de la Ley 2/1995.

76. Art. 75.3 de la Ley 2/1995.

federativos⁷⁷. Así se desprende de la específica regulación de la disciplina deportiva en Extremadura, que establece que *“son competiciones oficiales de ámbito autonómico las organizadas o tuteladas por una Federación Deportiva Extremeña, cuyo ámbito no exceda del territorio de la Comunidad Autónoma y en las que participen personas físicas o jurídicas con licencias expedidas por dichas Federaciones o, aun habiendo sido expedidas por otra de distinto ámbito, exista reconocimiento de las mismas por la Federación Extremeña correspondiente”*⁷⁸.

Por enmarcarse en la promoción de la práctica deportiva en edad escolar, es obligado referirse a los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX) impulsados desde la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de Extremadura⁷⁹ en colaboración con las federaciones deportivas extremeñas en cuanto encargadas de elaborar un Reglamento Técnico de Competición de su respectiva disciplina, que habrá de contar con el visto bueno de la Dirección General de Deportes⁸⁰ y que, con independencia de quien organice la competición de una determinada disciplina deportiva (la Dirección General de Deportes o la federación autonómica), ejercerá la potestad disciplinaria deportiva frente a las infracciones que puedan surgir en competición, siendo sus resoluciones impugnables ante el Comité Extremeño de Disciplina Deportiva⁸¹.

4. LEY 14/1998, DE 11 DE JUNIO, DEL DEPORTE DEL PAÍS VASCO

La administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco está integrada por los Territorios Históricos, coincidentes con las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya⁸², que operan a través de sus respectivas Juntas Generales y Diputaciones Forales, denominados conjuntamente Órganos Forales de los Territorios Históricos⁸³; las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma⁸⁴; y los Municipios del País Vasco⁸⁵. Por tanto, con independencia de la denominación que tiene su anclaje en las particularidades históricas de cada territorio, se advierten los tres clásicos niveles de la administración regional (autonómico, provincial y municipal).

77. Se prevé imperativamente una doble instancia federativa en el art. 7 del Decreto 24/2004, de 9 de marzo, por el que se regula la disciplina deportiva en Extremadura, en consonancia con lo prevenido en el art. 39.f) del Decreto 27/1998, de 17 de marzo, por el que se regulan las Federaciones Deportivas Extremeñas.

78. Art. 3 del Decreto 24/2004.

79. Sus bases han sido fijadas mediante Resolución de 1 de octubre de 2019.

80. Base Primera del Anexo I (JUDEX) de la Resolución de 1 de octubre de 2019.

81. Base séptima del Anexo III de la Resolución de 1 de octubre de 2019.

82. Art. 2.2 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

83. Art. 1.2 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. Sus competencias se enumeran en el art. 7.

84. Les corresponde, a modo de competencia residual, *“la legislación y la ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos”*, como prevé el art. 6.1 de la Ley 27/1983. En términos semejantes se plasma en el art. 4.1 de la Ley del Deporte del País Vasco.

85. Art. 3 de la Ley 27/1983.

Por lo que concierne al fomento del deporte, concretado en programas de deporte escolar y deporte para todos, se atribuye a las Instituciones Comunes la competencia normativa, mientras que su desarrollo y ejecución corresponde a los Territorios Históricos⁸⁶, sin perjuicio de la coordinación con la Administración municipal también en lo relativo a la ejecución⁸⁷.

De forma más específica, la legislación deportiva atribuye a las Instituciones Comunes el ejercicio de un notable elenco de competencias, tales como, “la regulación del régimen disciplinario deportivo⁸⁸”, “la regulación y organización del Comité Vasco de Justicia Deportiva⁸⁹”, “la regulación del régimen de las federaciones deportivas, clubes deportivos y demás entidades deportivas⁹⁰” y “la regulación de las bases y principios generales del deporte escolar, de su régimen disciplinario deportivo y de sus competiciones⁹¹”.

Los municipios son competentes para “la ejecución de los programas de deporte escolar aprobados por los órganos forales de los territorios históricos, en coordinación con estos últimos⁹²”, la ejecución conducente a “la extensión del deporte para todos⁹³” y, también, en distintos aspectos relacionados con los equipamientos deportivos municipales⁹⁴.

Las competiciones que recoge la legislación vasca son un reflejo de la particularidad de la organización institucional de esta Comunidad Autónoma. Dentro del ámbito federativo, además de la clásica referencia a competiciones estatales e internacionales, se habla de territoriales y comunitarias⁹⁵ en perfecta correlación con la singular distinción entre federaciones deportivas territoriales y vascas⁹⁶, debiendo las primeras estar integradas en las segundas⁹⁷, a las que corresponde en exclusiva la representación del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional⁹⁸. Tanto a las federaciones territoriales como a las vascas se les atribuye el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en las competiciones que tutelen⁹⁹.

86. Art. 7.b).6 de la Ley 27/1983 y art. 5.a) de la Ley 14/1998.

87. Art. 5.a) de la Ley 14/1998.

88. Art. 4.2.b) de la Ley 14/1998.

89. Art. 4.2.g) de la Ley 14/1998.

90. Art. 4.2.i) de la Ley 14/1998.

91. Art. 4.2.m) de la Ley 14/1998.

92. Art. 6.a) de la Ley 14/1998.

93. Art. 6.e) de la Ley 14/1998.

94. Art. 6.b), c), d) y f) de la Ley 14/1998.

95. Esta distinción se corresponde con la de competiciones de ámbito autonómico y de ámbito territorial inferior que contiene el art. 44.1.b) de la Ley 14/1998. Entre ellas se han de incluir las competiciones de ámbito local que puedan relacionarse con la competencia municipal de “ordenación y promoción del deporte” a que se refiere el art. 17.1.19 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

96. Art. 16.1-3 de la Ley 14/1998.

97. Art. 16.7 de la Ley 14/1998.

98. Art. 16.6 de la Ley 14/1998.

99. Art. 106.2.a) de la Ley 14/1998. Quizá deba entenderse derogado por aplicación de la Disposición Derogatoria Segunda de la Ley 14/1998 el art. 29.2 del Decreto 7/1989, de 10 de enero, por el que se regula el Reglamento de Disciplina Deportiva, que contemplaba

También está presente la distinción entre competiciones oficiales y no oficiales, así como la que contrapone las competiciones federativas a las propias del deporte escolar y universitario. El carácter oficial o no oficial de una competición parece quedar supeditado al hecho de que sea impulsada, calificada, autorizada u ordenada por una federación deportiva dentro de su ámbito de actuación (autonómico, las federaciones vascas y de ámbito territorial inferior, las federaciones territoriales)¹⁰⁰, pero resulta patente que también deben calificarse de oficiales las competiciones escolares¹⁰¹, universitarias e interuniversitarias, cualquiera que sea el ámbito territorial al que se extiendan¹⁰², puesto que en su calificación también intervienen órganos de la administración institucional.

Las competiciones de ámbito local podrán revestir o no carácter oficial, según hayan sido o no calificadas por las federaciones territoriales, por las Diputaciones Forales o por la Universidad en la que se celebre, con independencia de que su organización corresponda a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas¹⁰³. En todo caso, el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en competiciones de ámbito local pasa inevitablemente por que tengan el carácter de oficiales, pues sólo se atribuye “a las federaciones deportivas sobre todas las personas físicas o jurídicas federadas¹⁰⁴”, “a los órganos competentes en el ámbito del deporte escolar y del deporte universitario sobre sus participantes¹⁰⁵” y “al Comité Vasco de Justicia Deportiva sobre las mismas personas y entidades anteriores¹⁰⁶”, siendo de aplicación en el ejercicio de tal potestad los reglamentos disciplinarios que aprueben “el Gobierno Vasco en el ámbito del deporte escolar y universitario, así como las federaciones deportivas del País Vasco¹⁰⁷”.

La ley vasca del deporte nada refiere en relación con las competiciones no oficiales más allá de prever que podrán ser organizadas por toda clase de personas (físicas o jurídicas, públicas o privadas), por lo que, en función de quién

recurso ante la Federación Vasca contra los acuerdos y resoluciones disciplinarios dictados por las federaciones territoriales.

100. Arts. 16.2 y 3, 25.1.a), 44.1.a), 44.2 y 45.1 de la Ley 14/1998.

101. Entre ellas, los Juegos Deportivos Escolares de Euskadi, que celebra en 2020 su XXXIX edición, convocados por Orden de 10 de enero de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística y en los que se prevé (art. 10) un juez único de competición nombrado por la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco con una función revisora de las actuaciones de los jueces y árbitros durante el desarrollo de las pruebas.

102. Art. 44.1.d) de la Ley 14/1998. La calificación de las competiciones escolares corresponderá a las Diputaciones Forales o al Gobierno Vasco, según sean de ámbito territorial o autonómico. La de las universitarias, a cada Universidad. Las interuniversitarias, al Gobierno Vasco en colaboración con el Comité Vasco de Deporte Universitario, como se expresa en el art. 45.3 y 4 de la Ley 14/1998.

103. Art. 45.1 y 2 de la Ley 14/1998.

104. Art. 106.2.a) de la Ley 14/1998.

105. Art. 106.2.b) de la Ley 14/1998.

106. Art. 106.2.c) de la Ley 14/1998. Sus competencias se concretan en el art. 138, entre ellas “el conocimiento y resolución de los recursos que se deduzcan contra los acuerdos de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria deportiva”.

107. Art. 107 de la Ley 14/1998.

sea el organizador, las infracciones que en ellas puedan producirse podrán ser enjuiciadas conforme a las reglas establecidas y por los órganos señalados por los organizadores, incluyendo los federativos.

5. LEY 2/2000, DE 3 DE JULIO, DEL DEPORTE DE CANTABRIA

Dentro del Título II (Competencias y organización del deporte), se enuncian las competencias de las entidades locales de Cantabria en materia deportiva, entre ellas *“promover la práctica del deporte y, especialmente, el deporte de base y el deporte para todos¹⁰⁸”, “autorizar el desarrollo de actividades físico deportivas en las instalaciones municipales¹⁰⁹” y “cualesquiera otras que les sean atribuidas legal o reglamentariamente¹¹⁰”.*

La norma contempla asimismo competiciones deportivas distintas según su ámbito territorial (autonómicas, de zona y locales)¹¹¹ e implica a las entidades locales en la promoción de la actividad física y el deporte en la edad escolar¹¹², previéndose específicamente competiciones de tal carácter¹¹³.

Sin embargo, las referencias a la disciplina deportiva que contiene la ley autonómica la relacionan única y exclusivamente con el mundo del deporte federado. Así, se expresa que *“la disciplina deportiva se extiende, a los efectos de esta Ley, a las infracciones cometidas por las personas físicas y jurídicas pertenecientes a clubes federados y federaciones¹¹⁴”; y que “quedan sometidos al régimen disciplinario del deporte quienes participen en actividades deportivas federadas (...)”¹¹⁵”.*

Además, de la enumeración de los órganos que tienen atribuido el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva no se infiere el reconocimiento en este campo de especificidades en competiciones no federadas, con la única salvedad de las que puedan organizarse y disputarse en el seno de un club deportivo¹¹⁶.

En consecuencia, el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en competiciones de ámbito zonal o local está supeditado a que merezcan el adjetivo

108. Art. 7.b) de la Ley 2/2000.

109. Art. 7.e) de la Ley 2/2000.

110. Art. 7.k) de la Ley 2/2000.

111. Art. 37.1.b) de la Ley 2/2000 y art. 9.2.b) del Decreto 72/2002, de 20 de junio, del Consejo de Gobierno de Cantabria, de desarrollo general de la Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.

112. Art. 43.2 de la Ley 2/2000.

113. Art. 37.1.a) de la Ley 2/2000.

114. Art. 73.1 de la Ley 2/2000.

115. Art. 73.2 de la Ley 2/2000.

116. El art. 75.2.b) en relación con los arts. 74.1 y 2 y 75.1 de la Ley 2/2000 atribuye a los órganos directivos de los clubes deportivos la facultad de investigar, instruir y, en su caso, sancionar a sus socios, deportistas, técnicos, entrenadores, directivos y administradores por razón de las infracciones a las reglas del juego o competición o a las normas generales deportivas en las que puedan haber incurrido.

federadas' por haber sido calificadas, organizadas o gestionadas¹¹⁷ por la Federación de la modalidad deportiva de que se trate en el ejercicio delegado de funciones públicas de carácter administrativo que corresponde a la Dirección General de Deporte de Cantabria¹¹⁸, interviniendo en tal caso los órganos disciplinarios federativos¹¹⁹. Así se prevé expresamente para los Juegos Deportivos Escolares de Cantabria organizados por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte¹²⁰.

6. DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE LA LEY DEL DEPORTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

La legislación deportiva catalana enuncia las competencias de la administración local en este campo, diferenciando entre las municipales y las comarcales. La competencia municipal más significativa en relación con el objeto de nuestro estudio es la que consiste en *“promover de forma general la actividad física y el deporte en su ámbito territorial, especialmente en el área escolar (...)”*¹²¹, siendo coincidente con la que se atribuye a las comarcas en su respectivo territorio¹²².

La norma, a diferencia de la gran mayoría de leyes autonómicas del deporte, no contiene una clasificación de las competiciones en función de su ámbito territorial o de su naturaleza. Tan sólo se vislumbra la contraposición entre competiciones de carácter oficial y de carácter amistoso¹²³. Sin embargo, se enuncia como principio inspirador de la política deportiva de la Generalitat catalana el de *“promover y planificar el deporte de competición y de alto nivel en colaboración con las federaciones deportivas y otras autoridades competentes en la materia, velando para que se practique de acuerdo con los principios del movimiento olímpico”*¹²⁴, lo que permite atribuir el carácter de competiciones oficiales a aquellas que estén auspiciadas, bien por el gobierno autonómico catalán,

117. Por principio, la calificación, organización y gestión de competiciones deportivas oficiales en edad escolar corresponde directamente al gobierno cántabro, mientras que el resto corresponde a las federaciones deportivas, sin perjuicio de que uno y otras pueden autorizar la organización y gestión por parte de otras personas. Así se establece en el art. 39.1 de la Ley 2/2000.

118. Art. 6.c) y art. 26.1.a) de la Ley 2/2000.

119. Tenidos a estos efectos como cauce necesario para la aplicación del régimen disciplinario legal, según dispone el art. 39.2.d) de la Ley 2/2000 y el art. 13.d) del Decreto 72/2002. En todo caso, no es obligatoria una doble instancia federativa, sino que, como dispone el art. 59.1 del Decreto 72/2002, *“las Federaciones Deportivas Cántabras regularán en sus Estatutos la composición y el funcionamiento de los órganos competentes en materia disciplinaria. Cada Federación deberá crear al menos un órgano unipersonal o colegiado en materia disciplinaria”*. La última instancia administrativa es el Comité Cántabro de Disciplina Deportiva (arts. 26.4 y 90.1 de la Ley 2/2000 y art. 60 del Decreto 72/2002).

120. Art. 7 de la Orden UIC/2/2019, de 6 de septiembre, por la que se convocan los Juegos Deportivos Escolares y se regula el deporte en edad escolar para el curso académico 2019-2020 de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

121. Art. 39.1.a) del Decreto Legislativo 1/2000.

122. Art. 40.a) del Decreto Legislativo 1/2000.

123. Art. 19.3 del Decreto Legislativo 1/2000.

124. Art. 3.2.h) del Decreto Legislativo 1/2000.

bien por las federaciones deportivas catalanas¹²⁵, que parecen concebidas en el texto como las monopolizadoras de la actividad competitiva¹²⁶.

Esta impresión adquiere rango normativo a través de disposiciones de rango inferior, enunciando, entre las funciones de las federaciones deportivas catalanas, la de “ordenación, organización, calificación y autorización de las competiciones deportivas oficiales de Cataluña” y “el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que configuran el ente federativo¹²⁷”. En el ejercicio de esta función federativa, “las competiciones que las federaciones deportivas catalanas pueden organizar se dividen en: a) competiciones oficiales; b) competiciones no oficiales; c) competiciones mixtas¹²⁸”, teniendo el carácter de oficiales “las que la correspondiente federación deportiva catalana califique como tales mediante su inclusión en el calendario oficial¹²⁹”, sin perjuicio de que “la organización material de las competiciones oficiales la puede realizar cualquier persona física o jurídica, pública o privada, previa autorización de la federación deportiva catalana correspondiente¹³⁰”.

La ley del Deporte de Cataluña emplea el concepto de jurisdicción deportiva, articulada en tres ámbitos: el disciplinario, el competitivo y el electoral¹³¹. Por lo que concierne al ejercicio de la potestad deportiva de ámbito disciplinario, se confiere “a los comités de competición y disciplina deportiva y de apelación de cada federación deportiva (...) en general en lo referente a todas las personas y entidades que están federadas y desempeñan la actividad deportiva en el ámbito de actuación de la correspondiente federación catalana¹³²”; y “al Tribunal Catalán del Deporte en lo referente al conjunto de la organización deportiva y de las personas que la integran¹³³”.

La clasificación de las competiciones fijada reglamentariamente permite acotar el ámbito al que se extiende la potestad disciplinaria sancionadora, que no es otro que las competiciones oficiales, que exigen estar en posesión de la licencia correspondiente, y las mixtas¹³⁴, si bien en éstas la acción de los órganos disciplinarios queda circunscrita a los federados¹³⁵. Tanto en un caso como en otro, estamos realmente ante competiciones federadas.

125. Se habla de competiciones oficiales de carácter federativo en el art. 44.4 del Decreto Legislativo 1/2000.

126. Como *sensu contrario* se infiere de la prohibición en el art. 13 del Decreto Legislativo 1/2000 de que las agrupaciones deportivas intervengan en actividades competicionales, salvo acuerdo al respecto con las federaciones deportivas.

127. Art. 49.1.b) y f) del Decreto 58/2010, de 4 de mayo, de entidades deportivas de Cataluña.

128. Art. 101.2 del Decreto 58/2010.

129. Art. 101.3 del Decreto 58/2010.

130. Art. 102.3 del Decreto 58/2010.

131. Art. 85 del Decreto Legislativo 1/2000.

132. Art. 89.c) del Decreto Legislativo 1/2000.

133. Art. 89.d) del Decreto Legislativo 1/2000.

134. El art. 105.1 del Decreto 58/2010 las define como aquellas organizadas y autorizadas por las federaciones deportivas catalanas “con deportistas de su federación y con deportistas que son ajenos/as”.

135. Puesto que el art. 105.3 del Decreto 58/2010 establece que, “con respecto al resto de participantes, la federación deportiva catalana ejerce, mediante los jueces y árbitros, la facultad

Al margen de lo apuntado, el Consejo Catalán del Deporte de la Generalitat ampara un programa de promoción deportiva denominado Juegos Deportivos Escolares de Cataluña, cuya organización corresponde a los Consejos Deportivos de Cataluña¹³⁶ con la colaboración de las corporaciones locales. Debe considerarse como una competición oficial no federativa en el que encuentra espacio un cierto ejercicio de la potestad disciplinaria de ámbito local precisamente en la fase de la competición que discurre dentro del ámbito municipal y comarcal.

Forma parte de este particular programa una específica normativa competitiva y disciplinaria¹³⁷, que habrá de ser objeto de aplicación por los Comités de Competición y Disciplina Deportiva que intervengan en cualquiera de los ámbitos en los que discurra (local, comarcal, territorial y nacional)¹³⁸. En esta singular competición, se contemplan tres Comités de Competición y Disciplina Deportiva diferenciados por el calificativo comarcal (con competencia en el ámbito local y comarcal), territorial¹³⁹ y nacional¹⁴⁰, al que ha de sumarse, como última instancia de todos los comités anteriores, la intervención del Tribunal Catalán del Deporte¹⁴¹.

7. LEY FORAL 15/2001, DE 5 DE JULIO, DEL DEPORTE DE NAVARRA

Esta disposición se ocupa, dentro del Título II (Organización administrativa y competencias), de las competencias de los municipios y concejos de Navarra¹⁴² (Capítulo II), enunciando entre ellas las de “promover la práctica de las actividades deportivas¹⁴³”, “calificar y ordenar las competiciones deportivas

de dirección y control de las competiciones, pero no tiene toda la potestad disciplinaria que va más allá de la propia competición”.

136. Según el art. 16.1 del Decreto Legislativo 1/2000 “son entidades privadas de interés público y social, sin afán de lucro, que tienen por objeto el fomento, organización y promoción de la actividad deportiva en edad escolar”, siendo creados “de acuerdo con los criterios de la organización territorial de Cataluña y en función de las características demográficas, deportivas y geográficas del territorio”, con lo que sin duda comprenden actividades de ámbito local o municipal.

137. Denominada Normes de competició i disciplina esportiva dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya’ (NCDJEEC).

138. Art. 1 de las NCDJEEC.

139. Designa propiamente un ámbito territorial supracomarcal, según establece el punto 2.6 de la Normativa Tècnica de los JEEC.

140. Designa propiamente el ámbito territorial autonómico. Además de conocer en primera instancia de las vicisitudes que se den dentro de este ámbito, lo hará en segunda instancia en vía de recurso frente a las resoluciones dictadas por los comités comarcal y territorial, tal como señala el art. 13 de las NCDJEEC.

141. Arts. 5, 13.c) y 14 de las NCDJEEC.

142. El art. 2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración local de Navarra, concibe los municipios como “las entidades locales básicas e que se organiza territorialmente la Comunidad Foral de Navarra”, si bien tienen también la condición de entes locales las comarcas (art. 3.1.a) y los concejos (art. 3.1.b), “entidades locales enclavadas en el término de un municipio, con población y ámbito territorial inferiores al de éste” (art. 37.1).

143. Art. 7.a) y art. 14.1 y 2 de la Ley Foral 15/2001.

oficiales de ámbito local¹⁴⁴ y “cualesquiera otras que le sean atribuidas o delegadas de conformidad con el ordenamiento jurídico¹⁴⁵”, pudiendo contar con “la asistencia técnico-deportiva” de las federaciones en lo concerniente a la “organización y ejecución de los programas deportivos (...) y de las competiciones oficiales en edad escolar¹⁴⁶”.

En cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva, concebida como “la facultad de investigar y, en su caso, sancionar o corregir a las personas o entidades sometidas a la misma¹⁴⁷”, la Ley del Deporte de Navarra excluye de la misma “la facultad de dirección de los encuentros, pruebas o competiciones, por los jueces o árbitros a través de la mera aplicación de las reglas técnicas de la correspondiente modalidad o actividad deportiva¹⁴⁸”. De este modo, la potestad disciplinaria deportiva estrictamente considerada queda atribuida exclusivamente “a las federaciones deportivas de Navarra (...) en las competiciones deportivas oficiales correspondientes¹⁴⁹”; “a los órganos competentes que reglamentariamente se establezcan, en el ámbito de las competiciones oficiales en edad escolar, de las competiciones oficiales interuniversitarias, de las competiciones oficiales profesionales y, en su caso, de otras competiciones oficiales, de ámbito navarro¹⁵⁰”; y “al Comité de Justicia Deportiva de Navarra¹⁵¹”.

La interpretación razonable que puede hacerse de este precepto y, sobre todo, de su desarrollo normativo¹⁵², es que los órganos disciplinarios federativos ejercen esta potestad sobre los intervinientes en competiciones oficiales federadas¹⁵³, mientras que, para aquellas que no tengan tal carácter, por

144. Art. 7.f) y art. 24.a) de la Ley Foral 15/2001.

145. Art. 7.g) de la Ley Foral 15/2001.

146. Art. 17.2 de la Ley Foral 15/2001.

147. Art. 102.1 de la Ley Foral 15/2001 de forma coincidente a cómo la define la Ley 10/1990 en su art. 74.1.

148. Art. 102.3 de la Ley Foral 15/2001.

149. Art. 102.2.a) de la Ley Foral 15/2001.

150. Art. 102.2.b) de la Ley Foral 15/2001.

151. Art. 102.2.c) de la Ley Foral 15/2001.

152. Art. 19.2 del Decreto Foral 48/2003, de 10 de marzo, por el que se regula el Comité de Justicia Deportiva de Navarra y la Disciplina deportiva en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

153. El dualismo tradicional entre órganos de primera instancia y de apelación se concibe en el ámbito federado navarro como potestativo, puesto que, como indica el Preámbulo del Decreto Foral 48/2003, “la experiencia adquirida en los años de aplicación de la disciplina deportiva ha puesto de manifiesto: a) Que la existencia de un órgano de apelación en vía federativa no constituye en abstracto una mayor garantía para los sujetos sometidos a la disciplina deportiva, toda vez que la efectividad del mismo depende de la capacitación de sus miembros, la disponibilidad de personal cualificado, la experiencia de sus integrantes, etc., circunstancias a las que no todas las federaciones deportivas pueden dar respuesta satisfactoriamente dada su pequeña estructura. b) Que hay modalidades deportivas en las que la aplicación del régimen disciplinario es esporádica en razón de la naturaleza de la actividad. Circunstancias que conllevan a que se establezca la existencia del órgano de apelación como potestativa, salvo para aquellas federaciones que atendiendo a razones objetivas (volumen y naturaleza de las actividades desarrolladas, capacidad y estructura organizativa, circunstancias sociales) se establezca por la administración su existencia como obligatoria”. Con semejante fundamentación, el art. 24.2 del Decreto Foral 48/2003 dispone que “la estructura orgánica disciplinaria

ejemplo, “*aquellas competiciones oficiales cuya actividad deportiva no esté regida por una federación deportiva de Navarra*”¹⁵⁴, la norma que regule la competición de que se trate contemplará unos órganos disciplinarios específicos dotados de esta potestad, cuyas resoluciones serán recurribles ante el Comité de Justicia Deportiva de Navarra¹⁵⁵.

Por consiguiente, la legislación deportiva navarra atribuye a los municipios facultades de organización de competiciones oficiales no federadas dentro de su ámbito territorial de actuación y, por tal razón, el reglamento al que se sujete tal competición deberá prever unos órganos revestidos de potestad disciplinaria deportiva, que se ejercerá sobre todas las personas y entidades que en ella participen.

Naturaleza mixta tienen los denominados Juegos Deportivos de Navarra¹⁵⁶, cuya organización general es objeto de delegación a las federaciones deportivas navarras, que deberán elaborar el proyecto deportivo con los objetivos del programa para cada modalidad deportiva, en el que deberá constar un Reglamento Técnico y Disciplinario. Para cada modalidad deportiva se establecerá un Comité de Seguimiento con personal de la Consejería competente en materia de deporte y de la federación deportiva de que se trate, con la función de “*analizar las acciones antidisciplinarias excepcionales que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la actividad y proponer a los Comités disciplinarios, si lo estiman conveniente, diferentes alternativas en el cumplimiento de las posibles sanciones deportivas que pudieran derivarse en tales casos*”¹⁵⁷. Los comités disciplinarios serán los de cada federación deportiva, que aplicarán esa normativa específica, “*teniendo en cuenta criterios educativos y preventivos dada la naturaleza formativa y educativa que preside la organización y desarrollo del programa*”¹⁵⁸.

8. LEY 14/2006, DE 17 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE DE LAS ILLES BALEARS

La Ley del Deporte de las Islas Baleares delimita las competencias en materia de deporte que corresponden a la Comunidad Autónoma, a los consejos

federativa estará constituida necesariamente por un órgano que ejercerá la potestad disciplinaria y resolverá en primera instancia las cuestiones que se susciten en materia disciplinaria. Los estatutos o reglamentos federativos establecerán si la potestad disciplinaria se ejerce por un Comité o un Juez Único”; y el art. 24.3 precisa que “los estatutos o reglamentos federativos podrán establecer la existencia de una segunda instancia disciplinaria federativa ante un Comité o un Juez Único de apelación. En cualquier caso, deberá formar parte del Comité un licenciado en derecho o ser el Juez Único licenciado en derecho. La Administración Deportiva de la Comunidad Foral podrá determinar la existencia obligatoria del Comité o un Juez Único de apelación en relación con el volumen y naturaleza de las actividades, capacidad y estructura organizativa, o circunstancias sociales de las federaciones deportivas”.

154. Art. 19.2.c) del Decreto Foral 48/2003.

155. Art. 25.2.b) del Decreto Foral 48/2003 precisa que, en su actuación, “*podrá solventar y corregir todas las cuestiones de ámbito deportivo relacionadas con la aplicación de las normas reglamentarias deportivas reguladoras de la competición*”.

156. Convocados en su XXXIII edición por Resolución 540/2019, de 29 de julio, del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud de la Comunidad Foral de Navarra.

157. Art. 4.b) del Anexo I de la Normativa de los XXXIII Juegos Deportivos.

158. Art. 4.g) del Anexo I de la Normativa de los XXXIII Juegos Deportivos.

insulares y a las administraciones locales, tal como se articula su administración deportiva¹⁵⁹. Uno de los campos en los que la cooperación se manifiesta más intensamente es en el Programa de deporte escolar¹⁶⁰, cuya aprobación corresponde a la administración deportiva de la Comunidad Autónoma, pero en la que se favorecerá la participación de los consejos insulares, entes locales y entidades deportivas¹⁶¹.

El deporte en edad escolar se define como una actividad física y deportiva organizada, recreativa o competitiva, practicada en horario no lectivo y sujeta a una orientación educativa y formativa¹⁶². De ahí que uno de los ámbitos de participación que se establece es el de competición con la aspiración de “desarrollar un más alto nivel deportivo de ámbito federativo”, por lo que debe perseguirse “en el marco de entidades autorizadas y en el ámbito territorial insular y autonómico¹⁶³”.

La Ley de las Islas Baleares diferencia entre competiciones federadas, “promovidas, organizadas o tuteladas por las federaciones deportivas”, que “pueden ser de ámbito internacional, estatal, autonómico, insular y local¹⁶⁴”, y no federadas, que son “las que promueva u organice cualquier entidad oficialmente reconocida”, teniendo “la consideración de homologadas si previamente han sido aceptadas por la federación deportiva correspondiente¹⁶⁵”. También se refiere a las competiciones oficiales como las calificadas por las federaciones deportivas autonómicas¹⁶⁶, con la salvedad de las de carácter profesional, que lo serán por la consejería competente en materia deportiva¹⁶⁷.

En cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponde a las federaciones deportivas de las Illes Balears como función pública delegada por la administración deportiva de la Comunidad Autónoma¹⁶⁸, si bien sólo recaerá “sobre las personas que formen parte de la estructura orgánica y estatutaria, y sobre las personas físicas o jurídicas afiliadas a aquéllas¹⁶⁹”.

La enumeración de los órganos que ostentan esta potestad no prevé un tratamiento específico del deporte escolar en el plano disciplinario, de modo que su aspecto competitivo parece venir configurado como una actividad federativa que sujetará a sus participantes a la acción de sus órganos disciplinarios¹⁷⁰, siendo sus resoluciones impugnables ante el Tribunal Balear del Deporte¹⁷¹. En consecuencia,

159. Art. 8 de la Ley 14/2006.

160. Objeto de especial desarrollo mediante el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que regula la actividad deportiva en edad escolar en las Illes Balears.

161. Art. 19.2 de la Ley 14/2006.

162. Art. 1 del Decreto 38/2015.

163. Art. 5.1.c) del Decreto 38/2015.

164. Art. 40 de la Ley 14/2006.

165. Art. 41 de la Ley 14/2006.

166. Art. 42 de la Ley 14/2006.

167. Art. 43 de la Ley 14/2006.

168. Art. 53.1.b) de la Ley 14/2006.

169. Art. 67 de la Ley 14/2006.

170. Art. 138.c) de la Ley 14/2006.

171. Art. 182.d) de la Ley 14/2006.

no se aprecia propiamente un ámbito local de ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva al margen de la vida federativa, pero no puede excluirse que la reglamentación de una competición no federada establezca cauces propios de resolución de las infracciones que puedan surgir durante su celebración.

9. LEY 2/2011, DE 22 DE MARZO, DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Ley valenciana del deporte enuncia las competencias en materia deportiva de la Generalitat, las diputaciones provinciales y los municipios de la Comunidad Valenciana. A las diputaciones corresponde “*fomentar la promoción del deporte y la actividad física en los municipios de la Comunitat Valenciana*”¹⁷² y coordinar a la administración local con la autonómica y estatal en la promoción del deporte en edad escolar¹⁷³. A los municipios compete, en estrecha relación con el fomento del deporte en edad escolar¹⁷⁴, dar cumplimiento a la normativa que apruebe la administración autonómica al respecto¹⁷⁵ y, por lo que ahora interesa, “*la organización de campeonatos de ámbito local*”¹⁷⁶ así como colaborar con la administración autonómica en la consecución de los objetivos de los programas que auspicie¹⁷⁷, y con las federaciones y los clubes deportivos en la promoción de sus competiciones¹⁷⁸.

Específicamente en relación con el deporte escolar, la Ley valenciana del Deporte establece como línea general de actuación para el desarrollo de la política deportiva de la Generalitat Valenciana “*implantar y desarrollar programas deportivos en la edad escolar, con especial atención al desarrollo de actividades extraescolares de carácter recreativo o competitivo en los centros docentes, como garantía y medio de la formación integral de los jóvenes*”¹⁷⁹; y atribuye al Consell Valencia de l'Esport¹⁸⁰ el “*promocionar y organizar el deporte en edad escolar, siguiendo los criterios y finalidades del marco autonómico de la actividad física y el deporte en edad escolar de la Comunitat Valenciana (...)*”¹⁸¹, con especial participación de la Comisión Permanente del Deporte en Edad Escolar¹⁸², sin perjuicio de las competencias en materia de deporte de las diputaciones provinciales¹⁸³ y de los municipios¹⁸⁴.

172. Art. 6.2 de la Ley 2/2011.

173. Art. 6.3 de la Ley 2/2011.

174. Art. 7.2.b) de la Ley 2/2011.

175. Art. 7.2.a) de la Ley 2/2011.

176. Art. 7.2.k) de la Ley 2/2011.

177. Art. 7.7 de la Ley 2/2011.

178. Art. 7.8 de la Ley 2/2011.

179. Art. 3.8 de la Ley 2/2011.

180. Referencia que debe entenderse hecha a la Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana a tenor de lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat.

181. Art. 8.2.o) de la Ley 2/2011.

182. Art. 9.2 de la Ley 2/2011.

183. Art. 6.3 de la Ley 2/2011.

184. Art. 7.2.b) y 7.3.c) de la Ley 2/2011.

La norma no clasifica las competiciones, pero si conceptúa como oficiales “las calificadas como tales por las respectivas federaciones deportivas o por las administraciones públicas dentro de su ámbito competencial¹⁸⁵”. Así, se habla de competiciones oficiales interuniversitarias¹⁸⁶, calificadas por el Comité de Deporte Universitario de la Comunitat Valenciana, adscrito a la Conselleria con competencias en materia de deporte¹⁸⁷. El resto de competiciones oficiales de ámbito autonómico o inferior serán calificadas, organizadas y autorizadas por las federaciones deportivas de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de la supervisión que pueda efectuar la Administración autonómica¹⁸⁸, con la única excepción de las que realicen los entes públicos competentes¹⁸⁹.

Entre las competiciones que implican a todos los agentes de la administración¹⁹⁰ están los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana¹⁹¹, “*de convocatoria anual, dirigidas a la población en edad escolar, en atención a su diversidad y abierta a la participación de todo tipo de entidades y centros docentes*”¹⁹², pues su organización corresponde conjuntamente a la Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, con la colaboración de las diputaciones provinciales y las federaciones deportivas autonómicas¹⁹³.

A los ayuntamientos corresponde la organización de la Fase Municipal y, por tal razón, la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia viene estableciendo las Bases Generales de los Juegos Deportivos Municipales, en las que se prevé la aplicación de un “*Reglamento Disciplinario de los Juegos Deportivos Municipales y el Reglamento Federativo correspondiente*”, al tiempo que en ellas se recoge una estructura jurisdiccional articulada en tres niveles, con el Comité de Competición federativo como órgano de primera instancia; un Comité de Apelación de los Juegos Deportivos Municipales en segunda instancia, compuesto por técnicos municipales y asesorado por la Federación correspondiente; y una última instancia asumida por el Comité Valenciano de Disciplina Deportiva¹⁹⁴, mención injustificadamente anacrónica que sin duda pretende designar al actual Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana¹⁹⁵.

185. Arts. 25.2 y 66.1.a) de la Ley 2/2011.

186. Art. 43.2 de la Ley 2/2011.

187. Art. 44.1 de la Ley 2/2011.

188. Art. 8.2.j) de la Ley 2/2011.

189. Art. 66.1.a) de la Ley 2/2011.

190. Conforme al mandato del art. 4.2 de la Ley 2/2011: “*las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana promoverán el deporte y la actividad física, prestando su apoyo tanto al deporte de competición debidamente organizado como a las actividades deportivas libres y espontáneas*”.

191. Convocados en su edición XXXVIII por Resolución del Conseller de Educación, Cultura y Deporte de 17 de julio de 2019.

192. Art. 31.1 de la Ley 2/2011.

193. Art. 31.2 de la Ley 2/2011.

194. Base 5 de las Bases Generales de los Juegos Deportivos Municipales 2019-2020.

195. Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2011.

En las fases provinciales y autonómica se prevé también la intervención del Comité de Competición federativo en primera instancia, pero, en lugar del particular órgano de segunda instancia que se contiene en las Bases Generales de la Fundación Deportiva Municipal, interviene el Comité de Apelación federativo, si bien en ambos casos asistidos por un responsable federativo de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana.

Al margen de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, las federaciones deportivas pueden calificar, organizar y autorizar competiciones de ámbito provincial y local, en cuyo caso el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponderá a los órganos disciplinarios federativos¹⁹⁶ y, en última instancia administrativa, al Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana¹⁹⁷.

La intervención del Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana en competiciones no federativas puede ser problemática. No lo son las interuniversitarias, pero la norma expresamente le confiere potestad disciplinaria en este ámbito¹⁹⁸. No, en cambio, en otras competiciones calificadas por otros entes de la administración, si bien no puede obviarse el mandato legal de ejercicio de las competencias en materia de deporte de las distintas administraciones públicas de la Comunidad Valenciana “*bajo los principios de colaboración, coordinación e información interinstitucional*”, por lo que, a tal fin, “*se establecerán los mecanismos necesarios entre las diversas administraciones con el fin de racionalizar y coordinar todas las acciones y medios disponibles*”¹⁹⁹. Por tal razón, en la medida en que el Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana es un órgano adscrito a la Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana, que organiza junto con los ayuntamientos los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, la atribución de potestad disciplinaria deportiva que le hace la normativa reguladora de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana viene a suplir la preterición en la que a este respecto parece haber incurrido la Ley valenciana del Deporte.

10. LEY 3/2012, DE 2 DE ABRIL, DEL DEPORTE DE GALICIA

La administración pública gallega en materia de deporte tiene en su cúspide a la Comunidad Autónoma, competente, sin perjuicio de los convenios de colaboración que pueda suscribir con otras entidades públicas y privadas²⁰⁰, en lo atinente al ejercicio de la potestad sancionadora y la función

196. El Decreto 2/2018, de 12 de enero, por el que se regulan las entidades deportivas de la Comunitat Valenciana establece en su art. 49.1 la obligatoriedad de la constitución en cada federación de dos órganos disciplinarios que ejercerán la potestad disciplinaria deportiva en primera instancia y en apelación, pudiendo ser unipersonal el de primera instancia y debiendo ser colegiado el de segunda (art. 49.2).

197. Art. 118.2.e), 166.1 y 167.1 de la Ley 2/2011.

198. Arts. 43.2 y 118.2.e) de la Ley 2/2011.

199. Art. 4.1 de la Ley 2/2011.

200. Art. 6 de la Ley 3/2012.

inspectora²⁰¹; a la calificación y autorización de competiciones oficiales autonómicas; a la autorización de todas aquellas que lleven el gentilicio gallego' o equivalente²⁰²; y a la promoción, ordenación y organización del deporte en edad escolar y en el contexto universitario²⁰³. Junto a ella, la legislación autonómica se hace eco de las competencias que ostentan entes de la administración local, como las diputaciones provinciales en el fomento, promoción y difusión del deporte²⁰⁴; y como los municipios, a los que corresponde "*promover y, en su caso, ejecutar, en el ámbito de su competencia, los programas generales del deporte, mediante la coordinación con la Administración autonómica, así como con la colaboración con otros entes, federaciones deportivas gallegas u otras asociaciones deportivas*²⁰⁵", así como "*organizar campeonatos y eventos deportivos de carácter local*²⁰⁶".

Además de la clasificación de las competiciones según su ámbito territorial (locales, provinciales, interprovinciales, autonómicas, estatales e internacionales)²⁰⁷, la ley gallega del deporte distingue entre competiciones oficiales y no oficiales²⁰⁸; entre federadas y no federadas²⁰⁹; y entre escolares y universitarias²¹⁰. De entre todas ellas, la norma se detiene más específicamente en las competiciones oficiales de ámbito autonómico, pudiendo ser o no federadas según si su calificación corresponde a las federaciones deportivas gallegas o a la Administración autonómica²¹¹. También lo hace en las competiciones escolares, organizadas por la Administración autonómica²¹², sin perjuicio de que las fases previas a la fase final puedan serlo por otras administraciones o entidades²¹³.

El ejercicio de la potestad disciplinaria es función delegada que las federaciones deportivas gallegas ejercen con exclusividad²¹⁴. Así resulta de la enumeración de los órganos que la tienen atribuida²¹⁵, entre los cuales no se mencionan órganos específicos para conocer de los conflictos que puedan darse en competiciones escolares, de modo que, pese a no ser propiamente

201. Art. 5.i) de la Ley 3/2012.

202. Art. 5.l) de la Ley 3/2012.

203. Art. 5.n) de la Ley 3/2012.

204. Art. 7.1 de la Ley 3/2012.

205. Art. 8.2 de la Ley 3/2012.

206. Art. 8.8 de la Ley 3/2012.

207. Art. 18.b) de la Ley 3/2012.

208. Art. 18.a) de la Ley 3/2012.

209. Art. 18.c) de la Ley 3/2012.

210. Art. 18.d) de la Ley 3/2012.

211. Arts. 19.1 y 56.4.b) de la Ley 3/2012.

212. Entre ellas los Juegos Gallegos Deportivos en Edad Escolar, organizados por la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Galicia a través de los servicios de deporte de cada provincia y en colaboración con las federaciones deportivas.

213. Art. 24.4 de la Ley 3/2012.

214. Art. 56.4.f) de la Ley 3/2012 y art. 6.g) del Decreto 228/1994, de 14 de julio, por el que se regulan las Federaciones Deportivas.

215. Nótese que el art. 87.4 sujeta a la potestad disciplinaria a "*todas aquellas personas y entidades que, en condición de federados o inscritos en el Registro de Entidades Deportivas, desarrollen la modalidad deportiva correspondiente en el ámbito de la Comunidad Autónoma*".

competiciones federadas, la delegación legal que prevé la ley permite extender a ellas el radio de acción de los órganos disciplinarios federativos²¹⁶, frente a cuyas resoluciones cabe recurso ante el Comité Gallego de Justicia Deportiva²¹⁷, sin perjuicio de que las Bases Generales de las competiciones escolares puedan establecer especificidades concretas en materia disciplinaria.

11. LEY 1/2015, DE 23 DE MARZO, DEL EJERCICIO FÍSICO Y DEL DEPORTE DE LA RIOJA

El Título II de esta Ley fija las competencias que en materia deportiva asumen los distintos órganos de la administración riojana, que “*se ejercerán bajo los principios de colaboración, coordinación e información interinstitucional*”²¹⁸, extendiéndose también “*al deporte de competición debidamente organizado*”²¹⁹. Las competencias recayentes en la Comunidad Autónoma que interesa subrayar son “*promover, ordenar y organizar el deporte en edad escolar*”²²⁰ y “*calificar las competiciones deportivas de ámbito autonómico, así como autorizar la utilización de denominaciones como Campeonato de la Rioja, Copa de La Rioja, Campeonato Autonómico o expresiones de contenido similar*”²²¹. Las de los municipios son “*colaborar con entes locales, entidades deportivas u otros organizadores en la promoción de sus actividades deportivas*”²²² así como “*la promoción de campeonatos de ámbito local*”²²³.

Las competiciones deportivas de La Rioja pueden ser locales y autonómicas; federadas y no federadas²²⁴, oficiales²²⁵, no oficiales, populares, de deporte escolar y de deporte universitario²²⁶. Entre las autonómicas, organizadas por la consejería competente en materia de deporte, si bien con la colaboración de las federaciones deportivas riojanas²²⁷, entidades locales, asociaciones de

216. Arts. 87.5.c) y 93.1.a) de la Ley 3/2012; y art. 3.1.a) del Decreto 120/2013, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Comité Gallego de Justicia Deportiva. La Orden de 28 de julio de 1995 prevé en su art. 35 que las federaciones cuenten con un órgano de primera instancia (comité de competición o juez único) y un comité de apelación de segunda instancia.

217. Art. 87.5.d) de la Ley 3/2012.

218. Art. 5.1 de la Ley 1/2015.

219. Art. 5.2 de la Ley 1/2015.

220. Art. 8.1.1).c) de la Ley 1/2015.

221. Art. 8.1.3).g) de la Ley 1/2015.

222. Art. 9.2.a) de la Ley 1/2015.

223. Art. 9.2.h) de la Ley 1/2015.

224. Las competiciones federadas de ámbito autonómico serán organizadas por la federación deportiva de que se trate, sin perjuicio de la facultad de delegación en terceros, conforme disponen los arts. 40.3 y 87.1.b) de la Ley 1/2015.

225. Para las que se requiere estar en posesión de la licencia federativa, según disponen los arts. 40.2 y 103.1 de la Ley 1/2015. Esta calificación puede ser otorgada por las federaciones a las competiciones organizadas por terceros en atención a su relevancia e interés deportivo (art. 40.3).

226. Art. 39.2 de la Ley 1/2015.

227. Encargadas de su ejecución y desarrollo, así como de la elaboración de la normativa de cada deporte, según establece la Parte Dispositiva de la Resolución de 25 de junio de 2019, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se convocan los Juegos Deportivos de La Rioja 2019-2020.

padres y madres de alumnos y otras entidades deportivas, están los Juegos Deportivos de La Rioja²²⁸, cuyo régimen disciplinario, al que quedan sujetos espectadores, deportistas, entrenadores, árbitros, delegados, directivos, entidades deportivas, centros escolares y demás entidades participantes²²⁹, estará a cargo de las Federaciones deportivas riojanas, de la Comisión Deportiva de la Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud²³⁰, y del Tribunal del Deporte de La Rioja.

De esta forma, el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva no se circunscribe exclusivamente al ámbito federativo, sino que *“se extiende a las entidades deportivas y a sus deportistas, técnicos y directivos, a los jueces y árbitros y, en general, a todas aquellas personas y entidades que en su condición de agentes de la actividad deportiva se encuentren regulados en esta ley”*²³¹. Prueba de ello es que el Tribunal del Deporte de La Rioja ejerce sobre su potestad *“sobre todas aquellas personas y entidades que estén inscritas en el Registro del Deporte de La Rioja o que formen parte de los agentes y colectivos del deporte desarrollando, organizando o participando en la actividad deportiva en las formas previstas en la presente ley”*²³², con lo que su ámbito de actuación va más allá del meramente federativo, por más que éste sea el escenario más frecuente²³³.

En definitiva, resulta posible que los municipios riojanos promuevan competiciones dentro de su ámbito territorial, que quedarán sujetas al régimen disciplinario previsto en la ley autonómica, siendo que se reconoce potestad disciplinaria deportiva *“a los organizadores de eventos y actividades deportivas ordinarias de carácter no federado respecto de los participantes en las mismas, conforme a las bases y reglas establecidas por estos”*²³⁴, lo que incluye a los órganos disciplinarios que la normativa específica pueda haber previsto en competiciones de carácter local.

12. LEY 8/2015, DE 24 DE MARZO, DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA REGIÓN DE MURCIA

La distribución de competencias entre la Administración autonómica y local se plasma en su Título I. A la Dirección General competente en materia de deporte le corresponde entre otras cosas *“elaborar y desarrollar el programa de actividad física y deporte en edad escolar”*²³⁵ y *“supervisar la calificación y*

228. Art. 51.1 y 2 de la Ley 1/2015.

229. Art. 23 del Anexo I (Normativa General de los Juegos Deportivos de La Rioja para la Temporada 2019-2020) de la Resolución de 25 de junio de 2019.

230. Para las modalidades de baloncesto y Fútbol Sala en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, según establece el art. 25 del Anexo I (Normativa General de los Juegos Deportivos de La Rioja para la Temporada 2019-2020) de la Resolución de 25 de junio de 2019.

231. Art. 152.4 de la Ley 1/2015.

232. Art. 152.5.d) de la Ley 1/2015.

233. Sus funciones en materia de control de legalidad deportiva se enuncian en el art. 178.1 de la Ley 1/2015, entre las que destaca su función revisora de las cuestiones disciplinarias deportivas que sean de su competencia (art. 178.1.b).

234. Art. 152.5.c) de la Ley 1/2015.

235. Art. 8.b) de la Ley 8/2015.

*organización de las competiciones oficiales de ámbito autonómico, así como autorizar las denominaciones de competiciones que incluyan términos como Región de Murcia, Murcia, murciano, murciana, autonómico, autonómica, regional o similares*²³⁶". Por su parte, los municipios murcianos son competentes para "la promoción de la actividad física y el deporte"²³⁷, "la ejecución de los programas de actividad física y deporte en edad escolar"²³⁸, "la cooperación con entidades públicas y privadas para el cumplimiento de las finalidades previstas en esta ley, a cuyo efecto podrán suscribir los acuerdos o convenios que resulten necesarios"²³⁹ y "la cooperación con la Administración regional con los programas deportivos que contribuyan al fomento del deporte para todos"²⁴⁰.

La ley murciana recoge distintos criterios de clasificación de las competiciones: federadas y no federadas; oficiales, no oficiales y mixtas; profesionales y no profesionales; internacionales, nacionales, autonómicas, comarcales y locales²⁴¹.

Las competiciones oficiales de ámbito autonómico requieren de la calificación y autorización de las federaciones deportivas en el ejercicio delegado de funciones públicas de carácter administrativo²⁴², correspondiendo su organización, bien a las federaciones, bien a terceros por su encomienda²⁴³. De las que tengan un ámbito territorial inferior (comarcal o local) nada se dice, si bien puede inferirse que podrán ser calificadas como oficiales por los entes que las promuevan, previa consulta a las federaciones deportivas²⁴⁴. Entre ellas, pueden situarse las competiciones incluidas en los programas anuales de deporte escolar²⁴⁵, en los que intervienen coordinadamente la administración autonómica y municipal junto con las federaciones deportivas²⁴⁶, a las que corresponderá, bien "la organización de actividades deportivas de competición en edad escolar", bien "la asistencia técnica a las actividades incluidas en el programa que son organizadas por terceras entidades"²⁴⁷.

El ámbito de la disciplina deportiva se extiende a las infracciones acaecidas en competiciones tanto federativas como escolares y universitarias, con sujeción a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias²⁴⁸. El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva no corresponde monopolísticamente

236. Art. 8.j) de la Ley 8/2015.

237. Art. 8.a) de la Ley 8/2015.

238. Art. 8.e) de la Ley 8/2015.

239. Art. 8.g) de la Ley 8/2015.

240. Art. 10.i) de la Ley 8/2015.

241. Art. 73.1 de la Ley 8/2015.

242. Art. 51.1.a) y 73.2 de la Ley 8/2015.

243. Art. 74.1 de la Ley 8/2015.

244. Art. 73.9 párrafo segundo y 74.6 de la Ley 8/2015.

245. Art. 18.4 de la Ley 8/2015.

246. A través del Comité de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar de la Región de Murcia, a quien, entre otras, compete la "coordinación y seguimiento de la organización de campeonatos y campañas de actividad física y deporte en edad escolar" (art. 21.2.b) de la Ley 8/2015).

247. Art. 19.5 de la Ley 8/2015.

248. Art. 107.1 de la Ley 8/2015.

a las federaciones²⁴⁹, puesto que se prevé normativamente específicos “órganos competentes en materia de competiciones de deporte universitario y deporte escolar²⁵⁰”, situándose en la cúspide el Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia, al que se sujetan “ las personas físicas o jurídicas federadas, los participantes en competiciones de deporte universitario y deporte escolar, los organizadores de tales competiciones y los órganos de gobierno y representación de las federaciones deportivas²⁵¹” por ser de su competencia “el conocimiento y resolución de los recursos que se deduzcan contra los acuerdos de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria deportiva²⁵²”.

Por tanto, el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en el ámbito local corresponderá a las federaciones deportivas que organicen en ese contexto las competiciones o a los órganos específicamente constituidos al efecto con sujeción a las disposiciones reglamentarias que las rijan y al resto de normas que integran el ordenamiento jurídico murciano.

13. LEY 5/2015, DE 26 DE MARZO, DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA

La ley autonómica delimita en su Título I las competencias en materia de deporte en los niveles autonómico, provincial y local. Interesa destacar de entre las de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “la calificación de competiciones deportivas oficiales de oficio o a propuesta de las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha²⁵³” y “el fomento y la organización de competiciones deportivas de ámbito autonómico, así como el fomento y la colaboración en la organización de competiciones deportivas de ámbito territorial inferior o superior al autonómico²⁵⁴”. Las diputaciones provinciales son competentes para “la organización de competiciones deportivas populares de ámbito provincial²⁵⁵”, mientras que los municipios lo son para “la organización de competiciones deportivas populares y actividades físico recreativas en su término municipal²⁵⁶” y para autorizar “la organización de competiciones deportivas (...) que deban transcurrir en la vía pública de su término municipal²⁵⁷”.

Por su ámbito territorial, las competiciones deportivas pueden ser locales, provinciales, autonómicas, estatales o internacionales²⁵⁸. Por su naturaleza se diferencian entre oficiales y populares, siendo las primeras las calificadas con tal carácter por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha²⁵⁹.

249. Art. 108.2.a) de la Ley 8/2015.

250. Arts. 108.2.b) y 120.5 de la Ley 8/2015.

251. Arts. 108.2.c), 137 y 139.6 de la Ley 8/2015.

252. Art. 148.a) de la Ley 8/2015.

253. Art. 5.9 de la Ley 5/2015.

254. Art. 5.10 de la Ley 5/2015.

255. Art. 6.7 de la Ley 5/2015.

256. Art. 7.1.b) de la Ley 5/2015.

257. Art. 7.1.c) de la Ley 5/2015.

258. Art. 2.4 de la Ley 5/2015.

259. Art. 2.4.a) de la Ley 5/2015.

Dentro de las competiciones oficiales de ámbito autonómico, la ley distingue las calificadas de oficio por la Junta de Comunidades²⁶⁰ de aquellas otras que lo son a propuesta de una federación deportiva autonómica²⁶¹. Uno de los aspectos diferenciales que interesa destacar se relaciona con la normativa que es aplicable en uno y otro caso. En las competiciones calificadas de oficio por la Junta de Comunidades, su organización y desarrollo deberá ajustarse a la reglamentación técnica y disciplinaria que se apruebe, a menos que se opte por la remisión a la federativa²⁶². En las calificadas por la Junta de Comunidades a propuesta de las federaciones, “su organización y desarrollo se regirán por los estatutos y reglamentos de ésta y sus participantes con licencia federativa expedida o reconocida quedarán sometidos a su régimen disciplinario deportivo²⁶³”.

En cuanto a los órganos a los que compete el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en las competiciones oficiales, las federaciones deportivas autonómicas deben contar con un órgano con competencia en el ámbito disciplinario y competitivo²⁶⁴, siendo facultativo, en función de las necesidades, la previsión estatutaria de un órgano de apelación²⁶⁵. En cambio, en las competiciones que se enmarcan dentro de la actividad deportiva en edad escolar convocada anualmente²⁶⁶ ejercerá la potestad disciplinaria deportiva “un órgano unipersonal o colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de deportes²⁶⁷”. Para otras competiciones oficiales, será la Junta de Comunidades quien establecerá un órgano unipersonal o colegiado con funciones disciplinarias²⁶⁸.

260. Según el art. 10.1 de la Ley 5/2015 serán tales “aquellas competiciones deportivas que sean organizadas por la Junta de Comunidades en colaboración o no con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas”, correspondiendo a este organismo la titularidad de la competición, cualquiera que sea la entidad organizadora o la procedencia de los fondos (art. 10.2).

261. Art. 30.1.a) de la Ley 5/2015. Según el art. 11.1, la propuesta debe haber sido aprobada por la Asamblea General de la federación deportiva autonómica y en ella deben participar deportistas, técnicos y jueces o árbitros con licencia expedida o reconocida por dicha federación, siendo ésta la titular de la competición, cualquiera que sea la entidad organizadora o la procedencia de los fondos (art. 11.2).

262. Art. 10.3 de la Ley 5/2015.

263. Art. 11.3 de la Ley 5/2015.

264. Art. 37.1 de la Ley 5/2015.

265. Arts. 37.2 y 106.2.a) de la Ley 5/2015.

266. Por Orden 101/2019, de 5 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que regula y convoca el Programa Somos Deporte 3-18 de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2019/2020.

267. Art. 106.2.b) de la Ley 5/2015. El art. 5.6 de la Orden 101/2019 desarrolla este aspecto, previendo distintos comités de disciplina deportiva escolar adscritos a la Consejería competente en materia de deportes, según se trate de fases locales y provinciales, fases regionales y competiciones interprovinciales, mientras que para las ligas regionales cadetes y sectores infantiles asociados la potestad disciplinaria corresponderá a las federaciones deportivas. En todos los casos, las resoluciones serán impugnables ante el Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha.

268. Art. 106.2.c) de la Ley 5/2015.

Al margen de las oficiales, las federaciones pueden organizar competiciones no oficiales, ejerciendo en ellas la potestad disciplinaria deportiva a través de sus propios órganos²⁶⁹.

En la cúspide de órganos dotados de potestad disciplinaria se sitúa el Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha, que conoce de los recursos interpuestos contras las resoluciones dictadas por los órganos disciplinarios de instancia²⁷⁰.

En todo caso, el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva por parte de las entidades locales ha de quedar circunscrito a lo que pueda acontecer en competiciones populares organizadas por las diputaciones provinciales o por los ayuntamientos, siendo de aplicación el régimen disciplinario del que puedan haberse dotado reglamentariamente, sin que pueda excluirse que los órganos presentes en la legislación autonómica puedan en ellas intervenir, pues, si bien están llamados a intervenir en competiciones oficiales de carácter autonómico²⁷¹, la cooperación que la Ley impone a la administración autonómica en la organización de las actividades deportivas promovidas por los entes locales permitiría extender a ellas la acción de tales órganos.

14. LEY 5/2016, DE 19 DE JULIO, DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA

El sistema deportivo andaluz está integrado por todas aquellas administraciones públicas con competencias en materia deportiva, que las ejecutarán con sometimiento a los principios de coordinación, cooperación y colaboración²⁷². La Junta de Andalucía asume la competencia sobre “*ordenación, planificación y coordinación del deporte en edad escolar en Andalucía, así como el fomento de su práctica en coordinación y cooperación con las entidades locales, los centros escolares, las entidades deportivas andaluzas (...)* ”²⁷³, así como sobre “*el ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria en materia deportiva*”²⁷⁴.

En cuanto a las de las entidades locales, la ley andaluza del deporte se ocupa de las competencias de los municipios²⁷⁵ mediante el reenvío a la legislación autonómica de régimen local, que les atribuye en este área “*la planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos*”, “*la organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de atención especial*”²⁷⁶. Las provincias, sin embargo, tienen una función

269. Art. 29.1.f) de la Ley 5/2015.

270. Arts. 106.3 y 131.3 y 4 de la Ley 5/2015.

271. Art. 105.1 de la Ley 5/2015.

272. Art. 13.1 de la Ley 5/2016.

273. Art. 11.h) de la Ley 5/2016.

274. Art. 11.t) de la Ley 5/2016.

275. Art. 12.1 de la Ley 5/2016.

276. Art. 9.18.a) y c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.

meramente asistencial en aspectos técnicos, económicos y materiales para el correcto ejercicio de las competencias municipales en materia de deporte²⁷⁷.

Las competiciones deportivas se clasifican, según su naturaleza, en oficiales y no oficiales; y, según su ámbito territorial, en internacionales, nacionales, autonómicas, provinciales y comarcales²⁷⁸. Las competiciones oficiales, organizadas por cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas²⁷⁹, serán las calificadas como tales por las administraciones públicas²⁸⁰, las federaciones²⁸¹, que habrán de anunciarlas en su calendario, y las universidades andaluzas²⁸².

Las competiciones no oficiales, cualquiera que sea su organizador²⁸³, se definen negativamente como “*el resto de las competiciones realizadas en Andalucía no incluidas en el apartado anterior*”²⁸⁴, debiendo comunicarse su celebración a la consejería o a la entidad local en cuyo marco territorial se dispute²⁸⁵.

La previsión de competiciones de ámbitos provincial, comarcal y local en la legislación autonómica plantea la cuestión del ejercicio en ellas de la potestad disciplinaria deportiva, que se extiende exclusivamente a “*la organización, acceso y desarrollo de las competiciones deportivas de carácter oficial*”²⁸⁶. Es el caso de las competiciones escolares, que pueden proyectarse sobre cualquier ámbito territorial y se articulan en dos niveles (promoción y rendimiento de base), siendo las primeras desarrolladas a través de los centros educativos, mientras que las segundas se acometen principalmente a través de los clubes deportivos²⁸⁷. Al efecto, la consejería competente en materia de deporte prevé un órgano sancionador y un órgano disciplinario en materia deportiva²⁸⁸.

También corresponde por delegación a las federaciones deportivas autonómicas el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva²⁸⁹. Y el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía se concibe como “*superior órgano*

277. Art. 11.1.a), b) y c) de la Ley 5/2010 y art. 12.2 de la Ley 5/2016.

278. Art. 21.1.a) y b) de la Ley 5/2016.

279. Art. 22.3 de la Ley 5/2016

280. Entre ellas, las competiciones oficiales en edad escolar y las competiciones oficiales interuniversitarias por parte de la Consejería competente en materia de deporte, mientras que las atinentes a una sola universidad, por parte de la universidad organizadora, según dispone el art. 22.2 de la Ley 5/2016.

281. Calificarán y organizarán por delegación las competiciones oficiales federadas, como dispone el art. 22.1 segundo párrafo de la Ley 5/2016.

282. Art. 21.2 de la Ley 5/2016.

283. Art. 22.3 de la Ley 5/2016.

284. Art. 21.3 de la Ley 5/2016.

285. Art. 24.1 de la Ley 5/2016.

286. Art. 122.3 de la Ley 5/2016.

287. Art. 30.1.b) y c) de la Ley 5/2016.

288. Art. 14.c) de la Ley 5/2016.

289. Art. 60.2.e) de la Ley 5/2016, que se extiende a “*todas aquellas personas o entidades que de forma federada desarrollen la modalidad deportiva correspondiente en el ámbito de la Comunidad Autónoma*” (art. 124.1.b).

*administrativo de la Junta de Andalucía para la solución de litigios deportivos*²⁹⁰, entre los cuales tiene cabida el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva²⁹¹, conociendo y resolviendo los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas en tal materia por los órganos federativos o de la Administración autonómica en las competiciones de carácter oficial²⁹².

En las competiciones no oficiales, no obstante lo arriba expresado, también se ejercerá la potestad disciplinaria deportiva por cuanto sus organizadores deberán adoptar y comunicar a la Consejería o la entidad local en cuyo ámbito territorial discurra “*las reglas a que queda sometida la actividad y el régimen de controles, sanciones y de participación*”²⁹³, por lo que por fuerza habrán de contar con un reglamento en el que tengan cabida disposiciones de carácter disciplinario y órganos a los que corresponderá su aplicación²⁹⁴, con la salvedad de las que sean organizadas por las federaciones²⁹⁵, que quedarán sujetas a la acción de sus órganos disciplinarios.

15. LEY 16/2018, DE 4 DE DICIEMBRE, DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE ARAGÓN

En consonancia con la competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de promoción del deporte y fomento de la tecnificación y alto rendimiento²⁹⁶, y el reconocimiento a los municipios aragoneses de un espacio para la prestación de servicios públicos y el ejercicio de competencias relacionadas con la actividad deportiva²⁹⁷, la Ley del Deporte de Aragón delimita entre los distintos agentes de la Administración pública aragonesa las competencias que cada cual debe asumir en este campo, no sin imponerles en sus relaciones la subordinación a los deberes de información mutua, colaboración, cooperación y respeto a sus respectivos ámbitos competenciales²⁹⁸.

En lo que aquí interesa, las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón son “fomentar la actividad física y el deporte como derecho de la ciudadanía, en colaboración con las restantes Administraciones públicas”²⁹⁹, “organizar los Juegos Deportivos en Edad Escolar y las competiciones deportivas universitarias en la Comunidad Autónoma de Aragón”³⁰⁰, “calificar, en

290. Arts. 111.4 y 146.1 de la Ley 5/2016.

291. Arts. 111.2.b) y 124.1.c) de la Ley 5/2016.

292. Art. 147.c) de la Ley 5/2016.

293. Art. 24.2 de la Ley 5/2016.

294. El art. 48.2 de la Ley 5/2016 señala que, en este tipo de competiciones, “*las funciones de los árbitros o los jueces deportivos vendrán determinadas en la propia organización de las mismas*”.

295. Art. 35.1 párrafo segundo de la Ley 5/2016.

296. Art. 71.52ª de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

297. Art. 42.2.n) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

298. Art. 5.2 de la Ley 16/2018.

299. Art. 6.b) de la Ley 16/2018.

300. Art. 6.x) de la Ley 16/2018, en colaboración con las entidades locales y las federaciones deportivas aragonesas, conforme dispone el art. 15.6 y 16.3 de la Ley 16/2018.

colaboración con las federaciones deportivas aragonesas, las competiciones oficiales del deporte en Aragón³⁰¹.

En cuanto a las competencias de las entidades locales, se diferencia entre las de las diputaciones provinciales, las de las comarcas³⁰² y las de los municipios, destacando de entre ellas la de *“organizar o colaborar en la organización de competiciones o actividades deportivas de ámbito municipal, sin perjuicio de las competencias que, en materia de competiciones oficiales, tienen las federaciones deportivas aragonesas”*³⁰³. Ello trae consigo que pueda haber competiciones, no sólo de ámbito internacional, estatal y autonómico, sino también provincial, comarcal o local³⁰⁴.

Junto a esta clasificación, también se diferencia entre competiciones oficiales y no oficiales³⁰⁵, siendo las primeras “las así calificadas por las federaciones deportivas aragonesas y las organizadas directamente por la dirección general competente en materia de deporte”³⁰⁶, como es el caso de los Juegos Deportivos en Edad Escolar³⁰⁷ y los Campeonatos Universitarios de Aragón³⁰⁸.

En lo concerniente al ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva, se concibe como una función pública delegada que corresponde a las federaciones deportivas aragonesas³⁰⁹, debiendo al efecto aprobar y mantener actualizado *“un reglamento disciplinario que establezca un régimen de infracciones y sanciones, los procedimientos relativos a esta y los órganos competentes para su tramitación”*³¹⁰, que habrá de ser sometido a revisión y ratificación por el departamento competente en materia de deporte³¹¹.

Se ejerce por “órganos diferenciados, de carácter colegiado o unipersonal, que garanticen dos instancias en la aplicación de las normas de disciplina deportiva”³¹², aplicándose este principio tanto a las competiciones tuteladas

301. Art. 6.y) de la Ley 16/2018.

302. El art. 21.b.a) del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, atribuye a las comarcas *“la organización y colaboración en la organización de competiciones deportivas de ámbito comarcal, en especial las fases comarcales de los Juegos Escolares de Aragón, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a las federaciones deportivas aragonesas y a las entidades locales”*.

303. Art. 7.3.j) de la Ley 16/2018.

304. Art. 20 de la Ley 16/2018.

305. Se definen en el art. 23 como aquellas que, careciendo de la calificación federativa, *“se desarrolla por un organizador públicamente reconocido y responsable de la misma, otorgando premios o clasificaciones por resultados, y cuya programación y calendario implica una regularidad en el tiempo”*, debiendo comunicarse, previamente a su celebración, a la dirección general competente en materia de deporte (art. 25.2).

306. Art. 21.1 de la Ley 16/2018.

307. Cuyas Bases Generales para la XXXVII edición se registrarán por la Orden ECD/697/2019, de 3 de junio.

308. Art. 21.5 de la Ley 16/2018.

309. Art. 45.1.f) de la Ley 16/2018.

310. Art. 48.1.c) de la Ley 16/2018.

311. Art. 48.2 de la Ley 16/2018.

312. Art. 51.1 de la Ley 16/2018.

por las federaciones deportivas como a las organizadas por la dirección general competente en materia de deporte³¹³. Y recae sobre “todos aquellos que, en sus diferentes modalidades o niveles, de forma directa o indirecta, participen en la actividad deportiva de ámbito aragonés (...)”³¹⁴.

En la cúspide, como última instancia dentro de la vía administrativa, se sitúa el Tribunal Administrativo del Deporte Aragonés, a quien corresponde conocer y resolver los recursos interpuestos contra las decisiones definitivas adoptadas en materia disciplinaria por los órganos competentes de las entidades deportivas aragonesas³¹⁵, con la salvedad de las resoluciones dictadas por los órganos especializados de disciplina deportiva que puedan crearse para las competiciones deportivas oficiales organizadas directamente por el Gobierno aragonés, las cuales agotan la vía administrativa, sin que quepa más recurso que el potestativo de reposición³¹⁶. Así, para los Juegos Deportivos en Edad Escolar se instituye un Comité de Disciplina Deportiva Escolar de Aragón, que conocerá “*de los recursos presentados contra las resoluciones de los Comités de Competición de las Federaciones Deportivas Aragonesas*”³¹⁷.

De lo expuesto resulta que el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en competiciones de ámbito local exige como presupuesto su calificación como oficial por el órgano competente del gobierno autonómico en materia de deporte o por la federación deportiva aragonesa de que se trate. Revestidas así de carácter oficial, las infracciones que en su seno puedan surgir serán objeto de investigación y, en su caso, sanción por parte de los órganos disciplinarios competentes, sean los federativos o los específicamente constituidos al efecto. La función de la entidad local en cuyo ámbito territorial se desenvuelva la competición tendrá un papel meramente organizativo o colaborativo en la organización ajena.

16. LEY 1/2019, DE 30 DE ENERO, DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE CANARIAS

La Comunidad Autónoma de Canarias articula su organización territorial en islas, gobernadas, representadas y administradas por los llamados cabildos insulares en representación del gobierno y de la administración autonómica³¹⁸; y en municipios³¹⁹, ostentando ambas entidades competencias relacionadas con el deporte³²⁰.

313. Art. 107.2.c) y e) de la Ley 16/2018.

314. Art. 106.3 de la Ley 16/2018.

315. Art. 120.a) de la Ley 16/2018.

316. Art. 122.1 y 3 de la Ley 16/2018.

317. Base Vigésima, número 7.a) y b) de la Orden ECD/697/2019, de 3 de junio.

318. Art. 65.3 y 4 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

319. Art. 64.1 y 75 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

320. Art. 70.2.p) y art. 75.5.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias; art. 6.2.o) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares; art. 11.d) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias; y arts. 11 y 12 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias.

En concreto, “son competencias deportivas de los cabildos (...) “la promoción de la actividad deportiva, fomentando especialmente el deporte para todos y todas (...)”³²¹; “velar por el cumplimiento de las condiciones reglamentarias de seguridad, higiene y accesibilidad de las instalaciones y competiciones deportivas de ámbito insular”³²²; y “organizar las actividades físicas y deportivas en edad escolar de ámbito insular, bien directamente o en colaboración con las federaciones deportivas y otras entidades deportivas sin ánimo de lucro, garantizándose la educación en valores de tolerancia, igualdad, solidaridad e integración social así como el respeto entre deportistas, familias, espectadores, jueces, juezas y técnicos antes, durante y después de la práctica o competición deportiva”³²³”.

En términos semejantes, “son competencias de los ayuntamientos canarios (...) “la promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial (...)”; “velar por el cumplimiento de las condiciones reglamentarias de seguridad, higiene y accesibilidad de las instalaciones y competiciones deportivas locales”; “el fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al margen de las federaciones, en coordinación con los cabildos insulares (...)”; “el fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad escolar, como motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, garantizándose la educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad”; y “la autorización de eventos deportivos dentro de su ámbito territorial”.

Por lo que se refiere a las competiciones, éstas se diferencian, bien según su distinta escala territorial (local o municipal, insular, interinsular y autonómica)³²⁴, bien según su naturaleza, diferenciándose así entre competiciones oficiales y no oficiales. La Ley del Deporte de Canarias parece configurar estas últimas como aquellas “desarrolladas al margen de las federaciones”³²⁵, lo que no obsta para que sean objeto de una minuciosa regulación, como, por ejemplo, la exigencia de autorización del gobierno autonómico cuando el ámbito territorial al que se extiendan sea autonómico o suprainsular³²⁶, la obligatoriedad de un seguro que cubra los riesgos derivados de la práctica deportiva y la responsabilidad civil que pueda surgir así como la adopción de medidas de prevención frente a actos de violencia³²⁷.

En lo concerniente al aspecto disciplinario, la distinta naturaleza de las competiciones no comporta grandes cambios, pues, al establecerse que el ámbito de la disciplina deportiva se extiende a las infracciones a las reglas del juego o competición, y a las normas generales deportivas, se pone el acento en que ello acontezca en “*actividades o competiciones de ámbito canario*”³²⁸, entre

321. Art. 11.2.a) de la Ley 1/2019.

322. Art. 11.2.f) de la Ley 1/2019.

323. Art. 11.2.g) de la Ley 1/2019.

324. Arts. 17.1.b) y 52.3 de la Ley 1/2019.

325. Art. 23.1 de la Ley 1/2019.

326. Art. 10.4.g) de la Ley 1/2019.

327. Arts. 18.2 y 29.3 de la Ley 1/2019.

328. Art. 80.1 de la Ley 1/2019.

las cuales se hallan las de ámbito autonómico o inferior, tanto si son oficiales como si no.

Prueba de ello es que se exige a los organizadores de competiciones no oficiales “disponer de un órgano disciplinario para resolver las incidencias que en esta materia se susciten³²⁹”, cuyas decisiones “serán recurribles e impugnadas ante la jurisdicción civil”³³⁰, debiendo “aprobar un reglamento disciplinario acorde con la regulación que en materia de disciplina deportiva se contiene en esta ley y disposiciones que la desarrollen³³¹”, sin perjuicio de que, entretanto, se acuerde la “aplicación supletoria de las normas y reglamentos vigentes en la federación deportiva canaria cuya modalidad principal se corresponda con la del deporte no federado³³²”.

En cambio, en las competiciones oficiales, que serán las calificadas como tales por las federaciones deportivas canarias, con independencia de quien las organice³³³, intervendrán los órganos disciplinarios federativos³³⁴ y, en vía de recurso frente a sus resoluciones, el Comité Canario de Disciplina Deportiva³³⁵.

En definitiva, las competiciones deportivas de ámbito local o municipal deberán ajustarse en lo que respecta al ámbito disciplinario a lo que se prevé sobre el particular para las competiciones no oficiales, de modo que la reglamentación reguladora de la competición deberá prever un órgano dotado de potestad disciplinaria, así como un cuadro tipificado de infracciones y sanciones, siendo sus resoluciones impugnables ante la jurisdicción civil. La previsión de aplicación supletoria de la normativa federativa no puede incluir, sin embargo, en toda su extensión a los órganos con potestad disciplinaria deportiva, de modo que no resulta posible la intervención del Comité Canario de Disciplina Deportiva en este tipo de competiciones.

Como es una constante en todas las Comunidad Autónomas, la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias promueve los Campeonatos de Canarias de deporte en edad escolar, en cuya planificación y reglamentación participan también los Cabildos insulares y los Ayuntamientos canarios³³⁶, que contarán con unas normas generales de organización y desarrollo elaboradas y aprobadas anualmente por la Dirección General de Deportes con la participación de las federaciones respectivas³³⁷. Por lo que concierne al aspecto disciplinario, “*serán aplicables las normas de disciplina deportiva específicas de cada modalidad deportiva, excepto en lo relativo al procedimiento disciplinario*,”

329. Art. 23.1 de la Ley 1/2019.

330. Art. 23.4 de la Ley 1/2019.

331. Art. 23.2 de la Ley 1/2019.

332. Art. 23.3 de la Ley 1/2019.

333. Art. 66.1.a) de la Ley 1/2019.

334. El art. 78.2 de la Ley 1/2019 reconoce la dualidad de instancias en el ámbito federativo.

335. Arts. 78.1.b) y 83.1.b) y c) de la Ley 1/2019, sin perjuicio de las facultades del Comité Canario de Disciplina Deportiva de incoar expedientes a petición de la Dirección General de Deportes del gobierno canario (art. 83.2).

336. Convocados por Resolución de la Dirección General de Deportes de 3 de octubre de 2017 para las anualidades 2018, 2019, 2020 y 2021.

337. Resuelvo Cuarto de la Resolución de 3 de octubre de 2017.

*que será el previsto en las normas generales de organización y desarrollo*³³⁸. De forma provisional y de cara a la celebración de los XXXVIII Campeonatos de Canarias 2020, las Normas Generales de Organización y Desarrollo prevén un Juez Único de Competición en primera instancia, siendo sus resoluciones impugnables ante el Comité Canario de Disciplina Deportiva³³⁹.

17. LEY 3/2019, DE 25 DE FEBRERO, DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA DE CASTILLA Y LEÓN

En ejecución de las competencias autonómicas en materia de deporte³⁴⁰, se ha promulgado recientemente la que constituye la tercera Ley del Deporte en la Comunidad Autónoma de Castilla y León³⁴¹, que se hace eco de la concurrencia de Administraciones Públicas frente al fenómeno deportivo, delimitando las competencias de la Junta de Castilla y León³⁴², las de la Consejería competente en materia de deporte³⁴³, las de las provincias³⁴⁴ y las de los municipios y resto de entidades locales³⁴⁵.

Entre las competencias autonómicas, destacan las de “aprobar el Programa de Deporte en Edad Escolar, incluyendo los Juegos Escolares de Castilla y León y los Campeonatos Autonómicos de Edad³⁴⁶”, “organizar las competiciones y actividades deportivas dentro de los Juegos Escolares de Castilla y León en su fase autonómica³⁴⁷” y “ordenar, calificar, convocar y, en su caso, organizar, las competiciones deportivas universitarias de ámbito autonómico³⁴⁸”.

La competencia de las provincias que ahora interesa resaltar es la de “convocar, organizar y en su caso autorizar las actividades deportivas en edad escolar, especialmente las competiciones, dentro de los Juegos Escolares de Castilla y León en los términos que se determinen en el Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería competente en materia de deporte³⁴⁹”.

Pesa sobre los municipios y demás entidades locales el fomento de “*la actividad físico-deportiva en general y en especial el deporte popular y el deporte en edad escolar*”, pero, además, en los municipios de una población superior a veinte mil habitantes, les corresponde “*convocar, organizar y, en su caso,*

338. Resuelvo Sexto de la Resolución de 3 de octubre de 2017.

339. Art. 14 de las Normas Generales de Organización y Desarrollo de los XXXVIII Campeonatos de Canarias 2020.

340. Conforme al art. 70.1.33a de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

341. La Ley 9/1990, de 22 de junio, de Educación Física y Deportes de Castilla y León y Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León son las que le precedieron.

342. Art. 7 de la Ley 3/2019.

343. Art. 8 de la Ley 3/2019.

344. Art. 9 de la Ley 3/2019.

345. Art. 10 de la Ley 3/2019.

346. Art. 8.2.g) de la Ley 3/2019.

347. Art. 8.2.h) de la Ley 3/2019.

348. Art. 8.2.i) de la Ley 3/2019.

349. Art. 9.c) de la Ley 3/2019.

*autorizar las actividades deportivas escolares, especialmente las competiciones, dentro de los Juegos Escolares de Castilla y León, en los términos que se determinen en el Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería competente en materia de deporte*³⁵⁰.

El Programa de Deporte en Edad Escolar³⁵¹ se articula en los Juegos Escolares de Castilla y León, consistentes en actividades formativo-recreativas dirigidas a todos los escolares para difundir el deporte y crear hábitos de vida saludable³⁵²; y en los Campeonatos Autonómicos de Edad de Castilla y León, que son “*actividades de rendimiento deportivo dirigidas a aquellos deportistas que, por su especial aptitud o interés competitivo, se inicien en el perfeccionamiento y especialización de una o varias modalidades deportivas*³⁵³”, debiendo sus reglamentos disciplinarios “*adecuarse a la edad de los participantes, para lo que se tendrá en cuenta lo establecido en la normativa educativa que regula los derechos y deberes del alumnado y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo*³⁵⁴”.

La Ley del Deporte de Castilla y León clasifica las competiciones en torno a dos criterios: por su naturaleza, que diferencia entre oficiales, no oficiales y compuestas³⁵⁵, teniendo carácter oficial las calificadas como tales por las federaciones deportivas, las incluidas en el Programa de Deporte en Edad Escolar y las competiciones universitarias declaradas oficiales por la Consejería competente en materia de deporte³⁵⁶; y, por su ámbito territorial, que comprende las internacionales, nacionales, autonómicas³⁵⁷, provinciales y locales.

Es precisamente a las entidades locales a las que corresponde la “convocatoria, organización y en su caso autorización de las competiciones de ámbito local y provincial de los Juegos Escolares de Castilla y León³⁵⁸”, teniendo desde luego carácter oficial. Este aspecto determina la sujeción de sus participantes al

350. Art. 10.2.a) de la Ley 3/2019.

351. Art. 16 de la Ley 3/2019, correspondiendo su aprobación y desarrollo reglamentario a la Consejería competente en materia de deporte, mientras que su desarrollo corresponde a los clubes deportivos federados, secciones deportivas y federaciones deportivas autonómicas.

352. Art. 15.2 de la Ley 3/2019.

353. Art. 15.3 de la Ley 3/2019.

354. Art. 16.4 de la Ley 3/2019. A este respecto, la Orden CYT/619/2019, de 17 de junio, por la que se aprueba el Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2019-2020 prevé en su art. 16, como normas sancionadoras y de disciplina deportiva para los Campeonatos en Edad Escolar de Castilla y León, un mero reenvío al Título IX de la Ley 3/2019 y a lo que pueda establecerse en el Reglamento Técnico de cada modalidad deportiva, aprobado por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León.

355. Aquellas oficiales que permitan la participación de deportistas no federados, según dispone el art. 18.7 de la Ley 3/2019.

356. Art. 18.3 de la Ley 3/2019.

357. Tienen tal carácter las oficiales “*consistentes en la disputa de los títulos autonómicos, las clasificatorias para ello y las que sean clasificatorias para competiciones oficiales de ámbito nacional*”, como señala el art. 18.4 de la Ley 3/2019.

358. Art. 20.2 de la Ley 3/2019.

régimen disciplinario que contempla la ley autonómica³⁵⁹, en el que cumplen un papel decisivo las federaciones deportivas por corresponderles el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva, concebida como una función pública delegada de carácter administrativo³⁶⁰. Sin embargo, en estas competiciones, por tener carácter oficial y ser de ámbito escolar, el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponde “a la Administración pública responsable de su organización³⁶¹”, siendo sus resoluciones impugnables ante el Tribunal del Deporte de Castilla y León³⁶².

VII. CONCLUSIONES

En el ejercicio de las competencias que las leyes autonómicas del deporte atribuyen a las entidades locales tiene cabida de una forma más o menos expresa la facultad de organización de competiciones circunscritas a un ámbito territorial inferior al autonómico. Ello determina que en ellas sea posible el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva. Las peculiaridades organizativas de la competición determinarán a qué órganos en concreto corresponde tal ejercicio. Si las entidades locales actúan por sí solas, su propia reglamentación determinará a qué órganos corresponde el enjuiciamiento de lo que pueda acaecer durante su celebración. Ello es propio de las competiciones no oficiales, esto es, en aquellas que no vengan auspiciadas por las consejerías competentes en materia de deporte o por las federaciones deportivas en cuanto delegatarias de funciones públicas de carácter administrativo. En cambio, cuando las entidades locales intervienen en cooperación con las consejerías competentes en materia de deporte o con las federaciones deportivas autonómicas en las competiciones oficiales, el ejercicio de la potestad disciplinaria queda reservado a estos entes por ser a ellos a los que las leyes autonómicas reservan la facultad de calificar las competiciones como oficiales.

Las leyes del deporte autonómicas no atribuyen, por tanto, a las entidades locales el ejercicio autónomo de la potestad disciplinaria deportiva en las competiciones oficiales que se desenvuelven en su ámbito territorial, pues ésta depende esencialmente del aspecto de la calificación de las competiciones

359. El art. 100.4 de la Ley 3/2019 precisa que “la potestad disciplinaria se extiende a las entidades deportivas, a sus responsables y directivos, a los deportistas, técnicos y entrenadores, a los jueces y árbitros y, en general, a todas aquellas personas y entidades que participen en competiciones o actividades deportivas oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma, excepto en las competiciones deportivas estatales o internacionales que se celebren en el territorio de nuestra Comunidad”.

360. Art. 46.2.d) de la Ley 3/2019.

361. Art. 102.1.b) de la Ley 3/2019.

362. Art. 123.1.b) de la Ley 3/2019 señala que es su función “conocer y resolver, en vía de recurso, las pretensiones que se deduzcan respecto de las resoluciones recaídas en los expedientes disciplinarios de naturaleza deportiva tramitados por los órganos disciplinarios federativos y de los demás órganos creados por la Administración autonómica, en relación con las competiciones deportivas de carácter oficial”.

como oficiales. Ello no excluye, sin embargo, que la entidad que dispensa la calificación de oficial a una determinada competición, habitualmente la consejería competente en materia de deporte, pueda conformar órganos disciplinarios singulares en los que puedan tener participación las entidades locales, especialmente en aquellas fases de la competición que discurren por su preciso ámbito territorial.